



**Consejo Económico  
y Social**

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1989/47  
16 de diciembre de 1988

ESPAÑOL  
Original: FRANCES/INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
45° período de sesiones  
30 de enero a 11 de marzo de 1989  
Tema 11 del programa provisional

ULTERIOR PROMOCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS  
LIBERTADES FUNDAMENTALES, CON INCLUSION DE LA CUESTION DEL  
PROGRAMA Y LOS METODOS DE TRABAJO DE LA COMISION, DISTINTOS  
ENFOQUES Y MEDIOS POSIBLES DENTRO DEL SISTEMA DE LAS  
NACIONES UNIDAS PARA MEJORAR EL GOCE EFECTIVO DE LOS  
DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

Instituciones nacionales de protección y promoción  
de los derechos humanos

Informe actualizado del Secretario General

## INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION .....	1 - 7	1
I. ORGANOS LEGISLATIVOS Y ORGANOS ESTABLECIDOS PARA EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES .....	8 - 20	3
A. Organos legislativos .....	8 - 16	3
B. Organos establecidos para examinar la constitucionalidad de las leyes .....	17 - 20	5
II. ORGANOS JUDICIALES .....	21 - 59	6
A. Tribunales de jurisdicción general .....	21 - 28	6
B. Tribunales constitucionales .....	29 - 33	7
C. Tribunales especiales .....	34 - 43	9
D. Cortes y tribunales administrativos .....	44 - 45	11
E. Otros órganos establecidos en el marco del sistema judicial .....	46 - 59	12
III. ORGANOS ADMINISTRATIVOS .....	60 - 100	17
A. Comisiones de derechos humanos .....	61 - 73	17
B. Organismos de protección de grupos específicos .....	74 - 92	21
C. Organismos que garantizan la igualdad en el empleo .....	93 - 100	28
IV. EL <u>OMBUDSMAN</u> .....	101 - 113	31
V. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES .....	114	36

Anexos

I. Lista de instituciones nacionales .....	38
II. Bibliografía .....	60

## INTRODUCCION

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 42/116 de la Asamblea General y la resolución 1988/72 de la Comisión de Derechos Humanos tituladas "Instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos". En su resolución, la Asamblea General, recordando su resolución 41/129 de 4 de diciembre de 1986 y la resolución 1987/40 de la Comisión, de 10 de marzo de 1987, acogió con beneplácito el informe consolidado del Secretario General sobre las instituciones nacionales y le pidió que lo actualizara, teniendo en cuenta las necesidades prácticas de los que participaban en el establecimiento de instituciones nacionales, invitó al Secretario General a incluir en su informe actualizado toda la información proporcionada por los gobiernos y cualquier información adicional que los gobiernos desearan proporcionar, haciendo especial hincapié en el funcionamiento de los diversos modelos de instituciones nacionales en lo que respectaba a la aplicación de las normas internacionales en materia de derechos humanos, así como una lista de las instituciones nacionales actuales que tenían centros de coordinación y una bibliografía del material pertinente, y le pidió que le transmitiera el informe actualizado en su cuadragésimo cuarto período de sesiones, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social, a fin de darle amplia distribución como manual de las Naciones Unidas sobre instituciones nacionales.

2. En cumplimiento de anteriores resoluciones de la Asamblea General, el Secretario General ha presentado hasta ahora tres informes sustantivos a la Asamblea General sobre esta cuestión, con las siguientes signaturas: A/36/440, presentado en 1981, A/38/416, presentado en 1983 y el informe consolidado -E/CN.4/1987/37- presentado en 1987.

3. De conformidad con la petición de la Asamblea General, el Secretario General dirigió, el 27 de mayo de 1988, una nota verbal a los gobiernos, junto con una copia del informe consolidado presentado a la Asamblea en su cuadragésimo segundo período de sesiones (E/CN.4/1987/37), invitándolos a que le presentasen toda la información pertinente que desearan proporcionar, haciendo especial hincapié en el funcionamiento de los diversos modelos de instituciones nacionales en lo que respectaba a la aplicación de las normas internacionales en materia de derechos humanos.

4. Al 30 de noviembre de 1988, se habían recibido respuestas del Canadá, Finlandia, la República Dominicana, la República Federal de Alemania y la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Esas respuestas, así como una lista de las instituciones nacionales existentes y una bibliografía del material pertinente, forman ahora parte del presente informe actualizado. Como podrá apreciarse en las respuestas recibidas por el Secretario General, desde que la Asamblea General aprobara su resolución 42/116, la gama de las instituciones nacionales de los Estados que han proporcionado información corresponde, en lo fundamental, al modelo de instituciones examinadas en el informe anterior, con lo cual se tiende a reforzar el planteamiento básico de dicho informe.

5. Según se indicaba en anteriores informes, casi todas las instituciones nacionales pueden tener una influencia sobre la protección y promoción de los derechos humanos. En el presente informe, la expresión "derechos humanos" se ha utilizado en el sentido de incluir todos los derechos reconocidos en

la Declaración Universal, en los Pactos y demás instrumentos pertinentes sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. A los efectos del presente informe, por "institución" deberá entenderse los órganos, autoridades y organismos cuya función primordial es la promoción y protección de los derechos humanos.

6. Aunque en ciertos casos puede ser conveniente establecer una distinción entre "promoción" y "protección" de los derechos humanos, para mayor claridad de análisis, esta distinción parece algo artificial, teniendo en cuenta que la mayoría de las instituciones tienen realmente una doble finalidad (promoción y protección). El informe se ha preparado partiendo de la base de que todas las instituciones pertinentes, tanto si tienen por fin la promoción como la protección de los derechos humanos, y ya sean públicas o privadas, contribuyen a la plena realización de estos derechos en forma estrechamente interrelacionada.

7. Según destacaba la Asamblea General en sus resoluciones, se ha prestado plena atención a los diferentes sistemas sociales y jurídicos. Se ha tratado por todos los medios de tener en cuenta todos los sistemas existentes y hacer el estudio lo más equilibrado posible.

I. ORGANOS LEGISLATIVOS Y ORGANOS ESTABLECIDOS PARA  
EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

A. Organos legislativos

8. En la mayoría de los países, el fundamento básico para la protección de los derechos humanos del individuo a nivel nacional lo establece la Constitución y lo desarrollan los órganos legislativos. La función de estos órganos es realmente promulgar leyes y reglamentos con miras a la aplicación de los principios formulados en la Constitución. Los países que se basan en una constitución escrita, generalmente encomiendan al parlamento o al órgano legislativo equivalente la función de garantizar la protección de los derechos humanos.
9. La facultad esencial del parlamento es, desde luego, la facultad de derogar las leyes antiguas y promulgar leyes nuevas. Debido a la importancia de una minuciosa elaboración de las leyes, muchos parlamentos han establecido comités selectos, cuya función primordial es analizar y elaborar toda la legislación propuesta.
10. A fin de fortalecer aún más la función del parlamento por lo que respecta a la protección de los derechos humanos y civiles, muchos países han establecido órganos que funcionan en el marco del parlamento destinados a sensibilizar a los miembros del parlamento acerca de la corrupción en el gobierno, y a aumentar su capacidad para responder a las acusaciones formuladas por los ciudadanos cuyos derechos hayan sido violados por actos ilegales o inconstitucionales, o por las autoridades públicas. Estos órganos legislativos corresponden a cuatro categorías básicas: comités que tratan de proteger a los ciudadanos contra las violaciones de sus derechos por el poder ejecutivo; comités encargados de elaborar y analizar la legislación; comités destinados a recibir peticiones de los ciudadanos pidiendo al parlamento que investigue una cuestión de interés público o privado; y comités de encuesta o investigación.
11. Los comités establecidos para proteger los derechos de los ciudadanos contra las violaciones del Poder Ejecutivo pueden ser comités permanentes o comités especiales. Los comités permanentes, como su nombre indica, son comités parlamentarios que llevan a cabo de manera permanente investigaciones a través del año sobre la base de un programa determinado de cuestiones. Los comités especiales se crean en respuesta a situaciones o a cuestiones particulares que exigen una investigación que afecta al interés público. Tanto los comités permanentes como los comités especiales pueden investigar las acusaciones y someter sus conclusiones al parlamento en pleno instando a que se tomen las medidas adecuadas. La finalidad de estos comités es ejercer cierto control sobre el Poder Ejecutivo a fin de impedirle que actúe de manera arbitraria o represiva, o influenciar en las políticas del gobierno y actuar como órgano de enlace entre el gobierno y el público en general.
12. Las facultades del parlamento para controlar los poderes y actividades del Ejecutivo pueden también ejercerse a través de su autoridad para iniciar investigaciones de los cargos ejecutivos. En Polonia, por ejemplo, de conformidad con la Constitución, el Parlamento puede autorizar a la Cámara Suprema a investigar los funcionarios o autoridades del Estado

sospechosos de haber infringido la ley. En Finlandia, el Parlamento, que dispone de poderes legislativos, desempeña un papel central en la protección y promoción de los derechos fundamentales. En tal sentido, las funciones del Comité Parlamentario de Derecho Constitucional tienen máxima importancia. En tanto que órgano preparatorio, el Comité se encarga de las cuestiones relativas a la promulgación o derogación de la Constitución y de las excepciones en tal sentido y, a petición de otros comités, presenta sus observaciones sobre cuestiones relativas a la Constitución.

13. Cada vez con más frecuencia, los órganos legislativos de muchos países establecen comisiones permanentes y especiales de encuesta o investigación. Estas comisiones están destinadas primordialmente a investigar las cuestiones de interés público suscitadas por una posible acción arbitraria o una violación de la ley. Ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos establecen con frecuencia comités permanentes o especiales para investigar una amplia gama de cuestiones de interés público. En 1974, uno de estos comités, el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos, celebró las audiencias que dieron lugar a la dimisión del Presidente de los Estados Unidos. Los comités de este tipo están compuestos en general únicamente por miembros del órgano legislativo interesado, que tienen a su disposición abogados e investigadores independientes. Aunque estos comités no tienen facultades punitivas o autoridad judicial, pueden interrogar a los testigos bajo juramento y tomar testimonios.

14. Muchos países en todo el mundo reconocen el derecho de los ciudadanos particulares a hacer peticiones al parlamento u otros órganos legislativos a fin de reparar un agravio. En el Reino Unido, por ejemplo, el Comité de Peticiones, designado por la Cámara de los Comunes, puede recibir peticiones de los ciudadanos con el fin de reparar injusticias. Del mismo modo, en la India, en 1952, la Cámara Baja estableció un Comité de Peticiones para investigar las acusaciones generales contra el Gobierno.

15. A fin de atender las quejas de los ciudadanos que estimen que en el sistema de computadoras del Estado se han registrado informaciones inexactas, omisiones o datos no autorizados acerca de ellos, Nueva Zelanda aprobó en 1976 la Ley de Computadoras Wanganui, que dispone el nombramiento del Comisionado de la información confidencial del Centro de Computadoras de Wanganui como oficial del Parlamento. Este Comisionado que no es un funcionario administrativo y que sólo responde ante el Parlamento puede, si lo estima justificado después de completar una investigación, dirigirse al departamento correspondiente y hacer las supresiones o alteraciones que la Comisión considere necesarias. Los departamentos en cuestión deben respetar las instrucciones del Comisionado.

16. En España, la Comisión Permanente de Peticiones, que funciona en el marco del Congreso de los Diputados (Cámara Baja) debe examinar toda petición individual o colectiva que reciba el Congreso de los Diputados, y podrá acordar su remisión, por conducto del Presidente de la Cámara, al Defensor del Pueblo, a la Comisión del Congreso que estuviere conociendo del asunto de que se trate, al Senado, al Gobierno, a los Tribunales o al Ministerio Fiscal. Finalmente, los Presídiums de los Soviets Supremos de la URSS tienen facultades para recibir y examinar peticiones de los ciudadanos.

B. Organos establecidos para examinar la constitucionalidad  
de las leyes 1/

17. En muchos países, se han establecido órganos para garantizar que las leyes adoptadas por el Parlamento no infrinjan las normas y principios constitucionales.

18. Por ejemplo, una enmienda de 1983 a la Constitución de Hungría disponía que la Asamblea Nacional eligiese un consejo constitucional a fin de supervisar la constitucionalidad de las disposiciones legales y de las normas o directrices jurídicas. El Consejo Constitucional está facultado para suspender la aplicación de cualquier disposición legal (excepto las disposiciones legislativas emanadas del Consejo Nacional y del Consejo Presidencial) así como las instrucciones y decisiones de la Corte Suprema. El Consejo Constitucional contribuye también a la interpretación de las disposiciones de la Constitución.

19. En algunos países existen consejos constitucionales similares encargados de determinar la constitucionalidad de las disposiciones legislativas, que funcionan como órganos independientes al margen de la esfera parlamentaria. Por ejemplo, en Francia el Consejo Constitucional no es ni un órgano legislativo ni un órgano judicial. Sin embargo, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución francesa, de 4 de octubre de 1958, el Consejo Constitucional está facultado para examinar la constitucionalidad de las disposiciones que se le remiten antes de su promulgación. El Consejo puede también ser convocado por el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado o 60 diputados o senadores.

20. En otros países, como en Finlandia, los tribunales no tienen autoridad para examinar la constitucionalidad de las leyes después de que éstas han sido promulgadas y no existe ningún otro órgano facultado para examinar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento. El Comité de Derecho Constitucional del Parlamento finlandés ejerce un control anticipado, y el Presidente de la República puede plantear también la cuestión de la constitucionalidad de las leyes que deben promulgarse. Si el Presidente considera que una ley que ha sido tratada como ley ordinaria, en tanto que debiera haberse hecho uso del procedimiento requerido para la promulgación de una ley constitucional, puede negarse a confirmar la ley. Esta situación ya se ha producido.

## II. ORGANOS JUDICIALES

### A. Tribunales de jurisdicción general 2/

21. El poder judicial desempeña un papel primordial en la aplicación y protección de los derechos humanos a nivel nacional. Los tribunales, y en particular, los tribunales de jurisdicción general, disponen de amplias facultades mediante las cuales pueden ejercer su capacidad de hacer respetar los derechos humanos, incluida su función básica de pronunciar juicios justos, públicos e imparciales para las personas acusadas de delitos y de otros actos ilegales.

22. El fuero de un tribunal puede dar al acusado oportunidad de oír por primera vez todos los delitos concretos de que se le acusa. Es evidente que esa información es indispensable para preparar la eficaz defensa del acusado. Además, el tribunal proporciona al acusado la ocasión de hablar en su propia defensa, en caso de que decida obrar así, y de afrontar a los testigos que declaren contra él. Esas disposiciones son indispensables para garantizar la protección de los derechos del acusado, sobre todo en los casos penales en que el ministerio fiscal tiene una gran ventaja, ya que generalmente dispone de todos los órganos del Estado, incluida la policía, para enjuiciar un caso.

23. Los tribunales de jurisdicción general proporcionan también foros en que los particulares pueden impugnar los actos legislativos o ejecutivos, así como las acciones de las autoridades públicas que sean ilegales. Ese recurso es importante puesto que contribuye a hacer responsables jurídicamente de sus actos a los funcionarios públicos.

24. En los casos de privación de libertad, uno de los requisitos indispensables para una administración de justicia justa y equitativa es la existencia de recursos eficaces. Esos recursos suelen existir en todos los ordenamientos jurídicos. Se deben mencionar en particular los procedimientos de habeas corpus y amparo (aplicación de los derechos constitucionales) existentes en los países latinoamericanos.

25. En muchos países, la Constitución u otras leyes instituyen recursos especiales de habeas corpus y amparo para corregir la violación ilegal de los derechos humanos 3/. Tanto el habeas corpus como el amparo son procedimientos destinados principalmente a conseguir la pronta puesta en libertad de un particular que haya sido víctima de una detención o privación de libertad indebida, efectuada por un motivo o en una forma que no prescriba la ley. Esa acción puede ser resultado de una causa civil o penal.

26. Aun cuando los países pueden aplicar distintas normas en lo que se refiere al acceso a esos procedimientos, el factor común del habeas corpus y del amparo es la rapidez y simplicidad con que se aplican esos recursos. En general, un detenido presenta al juez o autoridad competente una "petición relativa a una detención ilegal". El tribunal ordena entonces al funcionario competente que comparezca ante el tribunal y explique los motivos por los que mantiene a la persona en detención preventiva. Además, en ese momento, el funcionario competente debe presentar el detenido al tribunal. Si el juez decide que, efectivamente, la persona en detención preventiva ha sido arrestada ilegalmente, ordenará que sea puesta en libertad inmediatamente.



27. Según la Constitución de Venezuela, por ejemplo, toda persona que sea sometida a privación o restricción de su libertad en violación de las garantías constitucionales tendrá derecho a pedir al juez competente que expida el mandamiento de habeas corpus. El juez ordenará inmediatamente al funcionario que mantenga a la persona agraviada en detención preventiva que informe en el plazo de 24 horas, e iniciará una comprobación sumaria. Si el juez estima que no se dan las condiciones legales para imponer la privación o restricción de libertad, ordenará la inmediata liberación del agraviado, o que se ponga fin a las restricciones impuestas, en el plazo de 96 horas a partir del momento en que se presentó la petición original. Además, las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela han hecho extensiva la aplicación del recurso de amparo a la violación de cualquier derecho fundamental.

28. Por último, en muchos países, los recursos de habeas corpus o amparo se pueden presentar directamente a la Corte Suprema, al Tribunal Superior o al Tribunal Constitucional, sin que sea necesario haber agotado los demás recursos jurídicos. Ese es el caso de El Salvador, España y la India.

#### B. Tribunales constitucionales 4/

29. Una de las formas más importantes mediante las cuales pueden los tribunales fortalecer la protección de los derechos humanos es el minucioso examen judicial de la validez constitucional de las leyes promulgadas y de las medidas administrativas aplicadas. En varios países se han establecido tribunales de esa clase que se ocupan exclusivamente de determinar la constitucionalidad de las leyes promulgadas y que se suelen denominar tribunales constitucionales 5/. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional español puede declarar nula una ley que contravenga los derechos garantizados por la Constitución. Análogamente, en el Ecuador, la Corte de Garantías Constitucionales, creada en 1945 y restablecida en 1978, tras un período de suspensión, trata de asegurar el respeto de los derechos humanos garantizados por la Constitución. Los miembros de la Corte de Garantías Constitucionales del Ecuador, integrada por tres jueces, son elegidos por la legislatura nacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, un representante del Presidente de la República, un representante de los trabajadores, un representante de las organizaciones industriales y dos representantes de los ciudadanos.

30. Aun cuando muchos países han creado específicamente tribunales constitucionales, otros muchos han facultado a sus tribunales superiores o cortes supremas para determinar la constitucionalidad de las leyes. En Singapur, por ejemplo, el Tribunal Supremo, además de sus facultades de entender en todos los litigios y querellas, tiene competencia para conocer y fallar todas las controversias de carácter constitucional. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 42 de la Constitución de Nigeria, el Tribunal Superior tiene jurisdicción especial para conocer y fallar casos de supuestas violaciones de los derechos humanos garantizados por la Constitución. Análogamente, el Tribunal Supremo del Canadá decide en última instancia con el fin de garantizar que los estatutos federales o provinciales o las medidas administrativas están en conformidad con la Carta de Derechos y Libertades establecida en la Constitución. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos entiende en las apelaciones contra los fallos de los tribunales estatales en

los casos de interpretación de la Constitución y, además, está facultado para fallar casos de apelación de los tribunales federales. El Tribunal puede declarar inconstitucional cualquier acto ejecutivo, acto del Congreso o ley de un Estado si niegan o reducen las libertades civiles garantizadas a la población.

31. Las funciones de la mayoría de los tribunales que examinan la constitucionalidad de las leyes suelen ser muy similares pero varía mucho la medida en que conceden el derecho de acceder a ellos directamente. La mayoría de los países han limitado estrictamente el acceso de los particulares a esos tribunales. Por ejemplo, las acciones incoadas ante el Tribunal Constitucional español deben ser iniciadas bien por el Presidente, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas, o las asambleas legislativas. Un juez de un tribunal puede remitir al Tribunal Constitucional, bien ex officio bien a petición de un partido, una cuestión sobre la validez constitucional de la ley aplicable al caso que se examina.

32. Sin embargo, algunos tribunales, como el Tribunal Supremo de Papua Nueva Guinea, dirimen cuestiones de derecho constitucional presentadas por otros tribunales, organizaciones u órganos gubernamentales, así como por los particulares. Análogamente, la Corte de Garantías Constitucionales del Ecuador puede aceptar querellas de particulares o de cualquier entidad relativas a supuestas violaciones de los derechos humanos. El Tribunal Constitucional Federal de la República Federal de Alemania puede aceptar una apelación de un particular que considere que han sido violados sus derechos garantizados por la Ley Básica. En Sri Lanka, todas las personas tienen el derecho constitucional de recurrir ante el Tribunal Supremo con motivo de una supuesta infracción o infracción inminente, del derecho fundamental reconocido en la Constitución, derivada de una acción ejecutiva o administrativa. Del mismo modo, la Constitución de la India confiere a todos el derecho legal a impugnar ante el Tribunal Supremo las medidas adoptadas por el Estado que menoscaban o puedan menoscabar sus derechos civiles y políticos. En algunos países latinoamericanos, como El Salvador, Panamá y Venezuela, la acción popular de inconstitucionalidad permite a todo ciudadano, incluso a los que no se hallen directamente afectados, recurrir ante la Corte Suprema para que se declare inconstitucional una ley determinada si viola los derechos garantizados por la Constitución. Por ejemplo, el artículo 112 de la Ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela dispone que toda persona cuyos derechos o intereses sean menoscabados por una ley, reglamento, ordenanza u otro acto provenientes de los órganos nacionales deliberantes a nivel del Estado o del municipio, o del poder ejecutivo nacional, puede exigir ante la Corte Suprema que ese acto sea declarado nulo por inconstitucionalidad o ilegalidad. En la India los recurrentes pueden apelar al Tribunal Supremo, incluso en primera instancia, para impugnar la constitucionalidad de las medidas que afecten a sus derechos civiles y políticos.

33. En la República Federal de Alemania, los recurrentes deben haber agotado todos los recursos estatales y locales disponibles para poder recurrir al Tribunal Constitucional o Supremo a fin de determinar la constitucionalidad de una ley o una acción.

C. Tribunales especiales 6/

34. Los sistemas jurídicos de muchos países cuentan, cada vez más, con órganos judiciales especializados de competencia limitada, que funcionan independientemente de los tribunales de jurisdicción general. Esos tribunales especializados han sido creados por diversas razones. En algunos casos han sido establecidos para tratar de cuestiones de carácter delicado, desde un punto de vista social o político. Además, el carácter de algunas cuestiones jurídicas puede exigir un cierto nivel de conocimientos técnicos para que la decisión sea justa. Por supuesto, la creación de esos tribunales contribuye a disminuir el volumen de trabajo de los tribunales de jurisdicción general, que por estar con frecuencia demasiado sobrecargados no pueden ofrecer oportunamente a la parte perjudicada la solución de su caso. En muchos países del mundo, se incluyen a menudo en el marco judicial tribunales especializados que tratan de diversas cuestiones. Cabe mencionar como ejemplo de esos tribunales especiales, los tribunales laborales y los tribunales de menores.

1. Tribunales de trabajo 7/

35. En los últimos años, muchos países han empezado a establecer tribunales destinados a la solución, conciliación o arbitraje de controversias derivadas de las relaciones laborales entre empleadores, empleados y sindicatos. Por ejemplo, en la Constitución de Yugoslavia se exige el establecimiento de "tribunales autónomos" facultados para actuar como conciliadores y árbitros en litigios laborales. Esos tribunales autónomos están integrados por jueces permanentes y trabajadores de entidades laborales organizadas, órganos del Estado y otras organizaciones y comunidades autónomas. En Noruega, se han creado tribunales especiales -Arbeidsretten- para la solución de litigios laborales. Las decisiones de esos tribunales no pueden ser apeladas ante tribunales ordinarios o tribunales de jurisdicción general. También se han establecido tribunales de trabajo en muchos otros países, entre ellos la República Federal de Alemania, Barbados, Finlandia, India, Kenya, Papua Nueva Guinea y Tailandia.

36. En algunos países, los órganos que tratan de la solución de controversias en materia de relaciones laborales no siempre son considerados órganos judiciales de pleno derecho. Intervienen en la solución de litigios en procedimientos cuasi judiciales. Por ejemplo, la potestad principal de la Junta Canadiense de Relaciones Laborales está en sus facultades estatutarias y regulatorias. Ahora bien, la Junta puede examinar apelaciones contra fallos en materia de seguridad cuando se alega que las condiciones de trabajo son peligrosas. Asimismo, la Junta dictamina sobre denuncias presentadas por los empleados porque se ha discriminado contra ellos o han sido castigados por ejercer sus derechos en relación con la seguridad. Una parte importante de las actividades de la Junta es aprobar o revisar las solicitudes presentadas por los sindicatos, a fin de actuar como agentes de conciliación para grupos de empleados. La jurisdicción de la Junta Canadiense de Relaciones Laborales está limitada a las empresas y organizaciones de reglamentación federal. Las juntas provinciales de relaciones laborales regulan las cuestiones relativas a las relaciones laborales en las esferas de la jurisdicción provincial. El Código Laboral de algunos países -por ejemplo Francia y Túnez- prevé el establecimiento de Conseils de Prud'hommes (tribunales de conciliación laboral) que tienen competencia para resolver litigios entre trabajadores y empleadores.

2. Tribunales de menores 8/

37. El establecimiento de tribunales de menores está basado en el principio de que los niños y los jóvenes necesitan una atención especial y un trato diferente del otorgado a los adultos con arreglo a la ley. La definición de los términos "lactantes", "niños", "jóvenes" y "menores" varía de un país a otro. También se hacen distinciones según los casos. Por ejemplo, un "menor" en materia penal puede no ser considerado como tal en casos civiles. Los tribunales de menores suelen tener amplias facultades discrecionales en la solución de los casos, desde la imposición al acusado de una sentencia, muchas veces suspendida, hasta su colocación en una institución de rehabilitación o en una escuela, o simplemente una advertencia o una amonestación.

38. En Australia los tribunales de menores pueden ver todas las denuncias presentadas contra niños por delitos sumarios, así como las acusaciones contra niños de delitos encausables a excepción del homicidio o de delitos punibles con cadena perpetua. En El Salvador, los tribunales de menores tienen competencia exclusiva para juzgar las infracciones consideradas crímenes o delitos de derecho común atribuidas a los menores de 18 años, para investigar la situación de los menores de 18 años que se encuentren en un estado de abandono moral o físico o en peligro y para adoptar las medidas necesarias para la atención, el trato, la colocación, la vigilancia y la educación de menores.

39. En Túnez, los menores de 13 a 18 años de edad, acusados de una infracción considerada crimen o delito, son llevados ante un juez de menores o ante un tribunal penal de menores. En tales casos los jueces tienen que ordenar las medidas adecuadas de protección, asistencia, vigilancia y educación. Cuando las circunstancias y la personalidad del delincuente así lo exijan, el tribunal puede dictar una sentencia penal contra un menor de más de 13 años, en cuyo caso la condena se cumple en un establecimiento especial.

40. Algunos Estados nombran miembros de tribunales de menores a personas, elegidas entre profesionales de la comunidad, calificadas para aportar al tribunal determinados conocimientos especializados de índole sociológica o psicológica, además de los jueces legalmente titulados que generalmente integran el grupo judicial en esos tribunales. Por ejemplo, en Italia el Tribunal Especial de Menores, que juzga a menores de 18 años de edad, está integrado por un juez del Tribunal de Apelaciones y dos ciudadanos (un hombre y una mujer) de más de 30 años de edad que son profesionales en biología, psiquiatría, antropología clínica o psicología.

41. Muchos tribunales de menores velan por la vida privada de los menores en los procedimientos de los tribunales. En Barbados, por ejemplo, la Ley relativa a menores delincuentes prevé que los tribunales de menores pueden reunirse en diferentes lugares y en momentos diferentes a los de los tribunales ordinarios. Esa Ley prohíbe también la publicación de información que pueda dar lugar a la identificación de todo delincuente menor. Asimismo, en Francia el Tribunal de Menores y el Tribunal Superior de Menores celebran siempre sus audiencias con carácter privado sin la presencia de más público que los parientes cercanos. Ahora bien, las decisiones son públicas.

42. Por último, es importante señalar que algunos Estados no juzgan a los menores delincuentes ante un tribunal organizado. Por ejemplo, en Chipre, los casos de menores delincuentes no se llevan ante un tribunal excepto cuando se ha cometido un crimen muy grave. En cambio, en la mayoría de los casos, los menores delincuentes están bajo la vigilancia de trabajadores sociales en su propio entorno.

### 3. Otros tribunales especiales

43. Además de los tribunales de menores y de los tribunales laborales, muchos países han informado acerca de la existencia de una amplia gama de órganos cuasijudiciales que resuelven los litigios relativos a varias categorías de derechos. Por ejemplo, Nueva Zelanda informa acerca de la existencia de un Tribunal de Tierras Maorí, establecido para resolver reclamaciones relativas a las tierras de su población indígena. En el mismo país, fue creado en 1978 un Tribunal de Examen de las Deportaciones, a fin de estudiar las órdenes administrativas de expulsión y deportación de los extranjeros. En Noruega, se ha creado un tribunal especial de seguro social o Trygderetten, cuyas decisiones pueden llevarse ante los tribunales ordinarios. También existe en Finlandia un tribunal del seguro. Se trata de un órgano de apelaciones en ciertas cuestiones relativas al seguro social que se ocupa, entre otras cosas, de las reclamaciones sobre pensiones nacionales, seguros de accidentes e indemnizaciones por daños sufridos en el servicio militar.

### D. Cortes y tribunales administrativos 9/

44. Los derechos humanos pueden protegerse por medio de un sistema judicial unitario o de un sistema doble de tribunales civiles (competentes para conocer de controversias civiles y casos penales) y tribunales administrativos (competentes para dictar fallos sobre reclamaciones presentadas contra actos administrativos). Este sistema doble es el que se sigue en Francia, donde el Tribunal de Casación, en la cúspide de la jerarquía judicial, se ocupa de los casos criminales y civiles, y el Consejo de Estado es la autoridad judicial que ejerce el control final sobre la administración, al fallar en última instancia las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos. El Consejo de Estado puede declarar nulos los actos administrativos contrarios a la ley así como los actos de las autoridades estatales o locales que han rebasado los límites de su jurisdicción. Además, el Consejo de Estado puede declarar nulos los actos que considere que se han realizado con fines distintos de los establecidos en la ley. Los recursos de que dispone el Consejo de Estado son la anulación de los actos impugnados y el pago de una indemnización a la víctima, a cargo de la administración.

45. Existen también tribunales administrativos de carácter análogo en otros países, en particular en Bélgica, Finlandia, Grecia, la República Federal de Alemania y Túnez. Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Túnez, creado en 1972, puede conocer de los recursos relativos al pago de una indemnización contra los fallos de los tribunales civiles, así como los recursos de anulación por abuso de autoridad contra actos de la administración, de las autoridades públicas locales o de los organismos administrativos públicos. En la República Federal de Alemania, todo acto administrativo en virtud del cual la persona afectada considere que se han violado sus derechos fundamentales (o que considere ilícito por otras razones) puede someterse a revisión judicial previa solicitud del interesado. Se encargan de tales procedimientos

los tribunales administrativos o, según sea el acto administrativo impugnado, los tribunales sociales (sobre todo en cuestiones de seguro social) o financieros (en cuestiones tributarias).

E. Otros órganos establecidos en el marco del sistema judicial

46. En el marco del sistema judicial, muchos países han establecido órganos para permitir que el proceso judicial pueda proteger debidamente los derechos de los particulares. En Finlandia, el Canciller de Justicia del Consejo de Estado es, junto con el ombudsman parlamentario (véase el capítulo IV), el supervisor supremo de la administración de justicia en Finlandia. Su importancia en cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos resulta evidente si se tiene en cuenta su facultad de dar solución a las quejas que le presentan los ciudadanos así como su posición de autoridad fiscal suprema, en virtud de la cual supervisa a los fiscales públicos que están obligados a cumplir sus órdenes. Contrariamente al ombudsman parlamentario, cuyos deberes se limitan a supervisar la legalidad de las actividades del juez y las autoridades, el Canciller de Justicia ejerce una autoridad general en cuestiones relativas a las quejas o reclamaciones. El Canciller de Justicia es nombrado por el Presidente de la República y presenta un informe anual al Presidente y al Parlamento relativo, entre otras cosas, a sus conclusiones en cuanto al cumplimiento de las leyes. Si el Canciller de Justicia considera que por alguna razón se justifican sus observaciones sobre la administración de justicia, o bien que se requieren nuevas medidas legislativas, puede también hacer sus propuestas o expresar sus opiniones acerca de estas cuestiones.

1. El Ministerio Público 10/

47. Uno de esos órganos es el Ministerio Público, institución que existe en varios países de América Latina. El Ministerio Público tiene una amplia gama de responsabilidades que contribuyen a la supervisión general de la administración de justicia. Para cada categoría de corte o tribunal del país existe el correspondiente representante del Ministerio Público. Los representantes del Ministerio Público pueden actuar de oficio o a raíz de una reclamación presentada por particulares o grupos que soliciten su intervención. En algunos países, el Ministerio Público es elegido por la Asamblea Legislativa. En otros, el Presidente del Ministerio Público es designado por el Presidente de una lista de candidatos presentadas por el Consejo de Estado. Este es el procedimiento que se sigue en Guatemala.

48. La competencia del Ministerio Público se extiende a las actividades de todos los tribunales judiciales y administrativos. Aunque el Ministerio Público no tiene la facultad de cambiar las leyes o anular una decisión administrativa o judicial, los representantes de sus oficinas tienen facultades para incoar proceso, demandar, solicitar que se adopten medidas disciplinarias, enjuiciar a los funcionarios públicos ante los tribunales competentes y ser parte en los procesos. En Colombia, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una amplia gama de funciones y responsabilidades. En general, puede recibir quejas de violaciones de derechos humanos de los particulares, investigar esas quejas y adoptar las medidas del caso, supervisar la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos (en especial los del poder judicial); garantizar que las autoridades competentes investiguen las actuaciones de los funcionarios o empleados

públicos que puedan constituir delito y representa los intereses de la nación en el foro judicial, personalmente o a través de sus representantes. En Venezuela, el Ministerio Público es una institución independiente que primordialmente supervisa las actuaciones de los funcionarios públicos. De conformidad con la Ley Orgánica de Venezuela, el Ministerio Público tiene la responsabilidad, entre otras cosas, de garantizar que los tribunales de la República apliquen la ley de manera uniforme en los casos penales, investigar los casos de presunta detención arbitraria, promover medidas para poner fin a tal detención ilegal, defender la independencia y autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones, y garantizar que los funcionarios policiales de prisiones y demás personal penitenciario respeten los derechos humanos de los presos.

2. El Procurador 11/

49. La Procuraduría (Prokuratura), dirigida por el Procurador General, es una institución conocida sobre todo en la Unión Soviética y en otros países de Europa oriental. Con variaciones de menor importancia en cuanto al alcance de las atribuciones y deberes de sus funcionarios, existen procuradurías en Bulgaria, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Además, la Procuraduría también se estableció en la República Popular Democrática de Corea en 1974.

50. La Procuraduría fue ideada para proteger los derechos garantizados constitucionalmente y los intereses protegidos por la ley de los ciudadanos de la URSS, así como para proteger los derechos y los intereses protegidos por la ley de las instituciones del Estado. A fin de dar a la Procuraduría los medios de desempeñar esa amplia función, el Estado asigna al Procurador una autoridad y jurisdicción de gran alcance. Por ejemplo, las facultades del Procurador incluyen el derecho a exigir documentos e información, y todos los organismos y funcionarios del Estado tienen que someter la información requerida a la Procuraduría a instancia del Procurador.

51. A diferencia del ombudsman de Escandinavia, al que con frecuencia se compara la Procuraduría, el Procurador General está facultado para supervigilar la legalidad y validez de los veredictos, decisiones, fallos y órdenes de los órganos judiciales en casos criminales y civiles. De conformidad con esa autoridad, el Procurador puede recurrir a un tribunal superior si, a su juicio, una sentencia dictada en un caso criminal o un fallo emitido en un caso civil es ilegal e injustificado. Sin embargo, no puede impugnar una sentencia absolutoria firme si ha transcurrido un año desde la fecha en que se dictó la sentencia.

52. El Procurador también está encargado de supervisar los organismos administrativos. A tal efecto, la Procuraduría puede actuar por iniciativa propia o sobre la base de una queja recibida de la parte agraviada. Se concede considerable atención a estas quejas. Una de las funciones más importantes del Procurador es garantizar el respeto de la ley al examinar estas reclamaciones. La ley que rige esta materia impone a todos los órganos administrativos que se ocupen de una querrela la obligación de llevar a cabo una investigación meticulosa, de comunicar a los autores de la reclamación por escrito y verbalmente la decisión adoptada y de exponer los motivos de las decisiones denegatorias. Además, la administración debe tratar de sacar conclusiones generales de las reclamaciones presentadas a fin de eliminar las

causas de las violaciones. Se imponen sanciones en caso de violación del procedimiento para examinar las reclamaciones, falta de cooperación burocrática o de represalias contra el demandante.

53. En general, la Procuraduría también está encargada de la prevención del delito y del enjuiciamiento de los delincuentes. La facultad de enjuiciamiento incluye la obligación de asegurar que en el interrogatorio y la instrucción preliminar se observen estrictamente los procedimientos de investigación criminal establecidos por la ley. El Procurador también está facultado para investigar la legalidad de la detención administrativa de un ciudadano. Además, el Procurador debe garantizar que no se lleve a cabo detención a menos que haya sido ordenada por un tribunal o aprobada por el Procurador. Por otro lado, el Procurador tiene el deber de poner inmediatamente en libertad a toda persona privada de la libertad ilegalmente o mantenida en detención más tiempo del establecido por la ley o por una sentencia judicial.

54. El Procurador de la URSS es elegido por el Soviet Supremo por un período de siete años. Sólo el Soviet Supremo puede destituir al Procurador General. Este se encarga de nombrar a los procuradores de las Repúblicas de la Unión, de las repúblicas autónomas, de los territorios, de las regiones y de las regiones autónomas. Las diversas dependencias de la Procuraduría, según la organización de la República, se subdividen en unidades administrativas. Aunque la Procuraduría es casi un órgano independiente, el Procurador General debe presentar un informe anual sobre sus actividades al Soviet Supremo.

### 3. Servicios de asistencia letrada 12/

55. Una de las instituciones más importantes para la salvaguardia de los derechos de la persona en el marco judicial es el sistema de los servicios de asistencia letrada que se presta en la mayoría de los países a quienes no tienen los medios financieros u otros medios para defenderse debidamente en un proceso judicial. En general, puede concederse esa asistencia cuando: a) el acusado carece de medios financieros para contratar un abogado; b) el acusado está mental o físicamente incapacitado para asumir su propia defensa ante el tribunal; o c) cuando los estatutos o leyes pertinentes son de un carácter tan complejo que exigen una formación jurídica para oponer una defensa eficaz. Muchos países han incluido disposiciones en sus constituciones o leyes que declaran la asistencia letrada obligatoria en algunos tipos de casos criminales. Por ejemplo, se considera indispensable la asistencia letrada para la administración de justicia en los siguientes casos: a) cuando se acusa a alguien de un crimen punible con la pena capital; b) cuando el acusado es un menor, sordo o mudo, o mentalmente incapaz; c) cuando el acusado no domina el idioma que se utiliza en el tribunal. En algunos países, el acusado puede renunciar a esta posibilidad.

56. A título de ilustración, pueden citarse los ejemplos siguientes. En Barbados, los servicios jurídicos de la comunidad ofrecen asistencia letrada gratuita únicamente a las personas acusadas de ciertos delitos, como asesinato, homicidio sin premeditación y violación, que carecen de medios para costear su propio abogado defensor. Del mismo modo, el Consejo de Asistencia Jurídica de Nigeria limita su concesión de asistencia letrada gratuita a los acusados en procesos criminales que carecen de recursos. En Noruega, se concede asistencia letrada en casos criminales a todas las personas que lo



solicitan. En las causas civiles, los solicitantes deben demostrar que carecen de recursos. Esto se aplica a todas las solicitudes de asistencia letrada gratuita, aun en los casos en que no se han incoado procesos judiciales. Cuando un acusado no tiene un defensor, en la República Federal de Alemania los tribunales nombran a un abogado, especialmente en los casos en que se acusa a la persona de un delito que acarree una pena de prisión mínima de un año. También se nombra abogado defensor para los acusados cuando parece ser necesaria la asistencia debido a la gravedad del acto o a las dificultades de hecho o de derecho, o cuando resulte evidente que el acusado no puede defenderse. En esos casos, una persona acusada, carente de medios, puede obtener la asistencia gratuita de un abogado designado por el tribunal. No es necesario presentar pruebas de falta de medios financieros. No obstante, de ser condenado, el acusado debe costear los gastos del proceso y del abogado designado por el Tribunal. En Marruecos, toda persona acusada puede, en cualquier momento del proceso, recurrir a la asistencia de un abogado defensor. El nombramiento de tal abogado es obligatorio cuando el acusado es menor de 16 años de edad o cuando se trata de una persona ciega o incapacitada. En Finlandia se proporciona asistencia letrada en forma gratuita o con un pago parcial de honorarios. Esa asistencia se otorga a las personas cuyos ingresos o bienes no son suficientes para contratar asistencia letrada en cuestiones judiciales. La ley finlandesa sobre asistencia letrada pública pone también la asistencia jurídica gratuita a disposición de los extranjeros y apátridas. En los Estados Unidos, hay oficinas de defensores públicos en todo el país que ofrecen asistencia jurídica a los acusados. El Estado o las autoridades locales nombran un defensor público si el acusado en un proceso criminal carece de recursos para contratar un abogado. El personal de las oficinas de los defensores públicos puede ser seleccionado de acuerdo con los procedimientos administrativos nombrado por el órgano judicial o electo. El sistema de defensores públicos es financiado con fondos públicos. En los Estados Unidos, se ha ampliado el derecho a tener defensor para incluir todos los casos en que el acusado corre el riesgo de ser encarcelado y no puede obtener su propio abogado. En la URSS y en la RSS de Ucrania, existen colegios de abogados que ofrecen asistencia letrada a los ciudadanos y las organizaciones. En los casos previstos en la ley, los ciudadanos reciben asistencia letrada gratuita.

57. Por último, diversos países han tomado disposiciones para ofrecer servicios especiales de asistencia letrada a las personas que no entienden el idioma en que se desarrollan las actuaciones judiciales o a las personas pertenecientes a grupos específicos de la población. Por ejemplo, en el Canadá, se ofrecen servicios jurídicos a la población autóctona a través de la Asociación de funcionarios judiciales indígenas y del Centro de Servicios Jurídicos "Makiganik Tukisiiniakvik".

58. En general, los servicios de asistencia letrada gratuita están a cargo de las asociaciones de abogados, sociedades de asistencia letrada u otros organismos similares que pueden recibir o no asistencia financiera del Gobierno; de abogados designados por el tribunal, que no trabajan para el Gobierno, o de abogados empleados por el Gobierno, conocidos como defensores públicos, que normalmente son nombrados por el Estado o por autoridades locales y son abogados con sueldo a tiempo completo. En Ontario las clínicas jurídicas de la comunidad reciben la asistencia financiera del Gobierno, pero están administradas por juntas directivas de la propia comunidad.

59. Algunos Estados exigen que la persona acusada solicite la asistencia letrada para que el tribunal designe un abogado en el caso. En otros, el tribunal designa a un abogado para defender al acusado, aunque éste no lo haya solicitado. En algunos Estados, como Costa Rica, el tribunal sólo nombra un abogado defensor si el acusado no ha designado un abogado dentro de un plazo determinado.

### III. ORGANOS ADMINISTRATIVOS

60. Los gobiernos de muchos países han creado comisiones u organismos especiales para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos relativos a la protección de los derechos humanos. A continuación se describen el papel y las funciones de tales comisiones y organismos.

#### A. Comisiones de derechos humanos 13/

61. El principal cometido de las comisiones de derechos humanos es proteger a los ciudadanos contra la discriminación y hacer respetar los derechos civiles y otros derechos humanos. En general, estas comisiones y los órganos públicos análogos a nivel nacional se encargan de recibir e investigar las denuncias que se les presentan sobre violaciones de derechos humanos o actos discriminatorios cometidos en violación de la legislación vigente. La mayor parte de las comisiones de derechos humanos son órganos colegiados cuyos miembros son seleccionados en la mayoría de los casos por el poder ejecutivo. Muchas comisiones gozan de independencia estatutaria y están encargadas de presentar regularmente informes al órgano legislativo. En algunos casos, como en el Japón, las comisiones de derechos humanos están organizadas en el seno del Ministerio de Justicia. Análogamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de seleccionar a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos tanto en Noruega como en Dinamarca.

62. Los miembros de las comisiones pueden proceder de diversos campos, pero, en general, se eligen preferentemente personas con experiencia previa en el ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo, entre los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Dinamarca figuran representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de otros ministerios y de diversas organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos. En algunos casos se imponen restricciones para la selección de los miembros de las comisiones. En los Estados Unidos, por ejemplo, los miembros de la Comisión de Derechos Civiles son elegidos por el Presidente y han de ser confirmados por el Senado, imponiéndose como condición que no más de la mitad de los miembros de la Comisión pertenezcan al mismo partido político. En el Japón, el Ministerio de Justicia elige a los miembros del Departamento de Libertades Civiles entre los ciudadanos de las ocho localidades que cuentan con oficinas de dicho Departamento en todo el país. Entre los ciudadanos elegidos para integrar la Comisión hay asistentes sociales, maestros de escuela, abogados, personal de los medios de información y trabajadores manuales de la agricultura y la silvicultura.

63. Por lo general, las leyes o estatutos en virtud de los cuales se establece una comisión de derechos humanos definen la jurisdicción de ésta, ya que codifican los distintos actos discriminatorios o contrarios a la ley que la Comisión está facultada para investigar. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Australia (creada en 1981) es competente para recibir e investigar denuncias referentes a violaciones de cualquiera de los derechos determinados en la Ley contra la Discriminación Racial y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos está facultada para recibir e investigar las denuncias de discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. En el Canadá se protege una gama aún más amplia de derechos, de conformidad con las leyes

federales, provinciales y territoriales de derechos humanos. Por ejemplo, la Ley de Derechos Humanos del Canadá faculta a la Comisión de Derechos Humanos del Canadá para que investigue las denuncias de discriminación por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, religión, edad, sexo, estado civil, situación familiar, incapacidad o condena por un delito indultado. Entre las esferas comprendidas en otras jurisdicciones figuran la asistencia pública, (vivienda, la comisión social, la orientación sexual, las condiciones políticas y el linaje).

64. Los procedimientos utilizados por las comisiones de derechos humanos para la investigación y resolución de las denuncias varían de un país a otro. No obstante, la realidad es que dichas comisiones no están facultadas en casi ningún país para adoptar por sí mismas decisiones vinculantes en esa esfera. En la mayor parte de los casos, las comisiones de derechos humanos tratan de llegar a un arreglo entre las partes. Si el arreglo o las medidas correctivas sugeridas por la comisión no se llevan a la práctica, ésta suele estar facultada para pedir que los tribunales o el ministerio fiscal se encarguen de la adjudicación o el enjuiciamiento del caso. Asimismo, la comisión puede, como sucede en Australia, presentar simplemente la cuestión al Procurador General junto con una recomendación sobre el procedimiento jurídico que convenga seguir.

65. En los casos en que no es posible llegar a un acuerdo, la ley suele indicar el procedimiento que se ha de seguir. En el Canadá, por ejemplo, por recomendación de la comisión de derechos humanos interesada, debe establecerse una junta de investigación (en algunas jurisdicciones, el nombramiento de la junta de investigación es facultativo). Los miembros de la Junta son totalmente independientes de la Comisión. Si la Junta decide que en realidad se ha cometido una violación de los derechos humanos, puede determinar las medidas correctivas que convenga adoptar, incluido el pago de daños y perjuicios. Si no se aplica la orden o recomendación de la Junta, según sea el caso, los tribunales -o, como en algunas provincias, la propia Comisión de Derechos Humanos- pueden obligar a ponerla en práctica. En una provincia canadiense en la que no existe junta de investigación, la Comisión de Derechos Humanos puede, con el consentimiento del demandante, solicitar un requerimiento judicial si no se ha aplicado su recomendación.

66. En algunos casos, las comisiones de derechos humanos pueden recibir o investigar denuncias, pero no están facultadas para tomar medidas al respecto. Tal es el caso de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. El cometido de la Comisión consiste principalmente en determinar si el asunto es conforme a la ley de derechos civiles y en estudiar la situación por lo que hace al respeto de los derechos humanos. La Comisión, empero, está facultada para recibir denuncias, así como información atinente a las mismas. En el desempeño de sus tareas, la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos puede citar testigos y celebrar audiencias formales.

67. Una de las funciones más importantes de las comisiones de derechos humanos está relacionada con la facultad que éstas tienen de examinar sistemáticamente las políticas gubernamentales vigentes en el ámbito de los derechos humanos y de sugerir mejoras. Por ejemplo, además de su competencia para conocer, investigar y resolver casos relacionados con violaciones de derechos humanos, la Comisión Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Nicaragua lleva a cabo exámenes periódicos de los sistemas

legislativo y administrativo y recomienda al Gobierno posibles mejoras de esos sistemas. Asimismo, la Comisión Asesora Permanente de Derechos Humanos para Irlanda del Norte aconseja al Parlamento sobre la idoneidad y la eficacia de la legislación vigente para impedir la discriminación basada en las creencias religiosas y las opiniones políticas.

68. Muchas comisiones de derechos humanos se encargan de verificar la concordancia de las leyes estatales con la legislación vigente en materia de derechos humanos. Por ejemplo, cuando examina toda nueva ley promulgada por el Estado, el Comité Jurídico del Senado de Zimbabwe vela por que la nueva legislación esté en armonía con la Declaración de Derechos que figura en la Constitución nacional. Asimismo, dicho Comité indica al Gobierno si alguna de las disposiciones de la nueva legislación es contraria a la Declaración de Derechos. Del mismo modo el Comité Interministerial de Derechos Humanos de Italia examina sistemáticamente las medidas adoptadas en los ámbitos legislativo y administrativo a fin de garantizar que dicho país cumpla las obligaciones contraídas en virtud de las convenciones internacionales sobre derechos humanos. También en Nueva Zelanda la Comisión de Derechos Humanos se encarga de asesorar al Primer Ministro sobre la conveniencia de aceptar o no los diversos instrumentos internacionales en esa esfera. Además, puede aconsejar sobre las consecuencias que puede acarrear para los derechos humanos toda política o ley propuestas por el Gobierno.

69. La mayoría de las comisiones de derechos humanos también se dedican activamente a informar al público sobre cuáles son sus funciones y propósitos, y acerca de diversas cuestiones importantes relativas a los derechos humanos. En anteriores informes se ha calificado esa tarea de "papel promotor" de las comisiones de derechos humanos. Estas suelen cumplir su cometido en esa esfera mediante la organización de seminarios, servicios de asesoramiento y reuniones, y a través de la distribución periódica de informes, estudios y boletines preparados por la Comisión o por otras instituciones de derechos humanos. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Australia ha publicado recientemente su propio manual sobre derechos humanos. Con frecuencia, la tarea de educar al público en la esfera de los derechos humanos forma parte del mandato estatutario de las comisiones de derechos humanos. Por ejemplo, una parte del mandato del Departamento de Libertades Civiles del Japón consiste en organizar actividades educativas y promover campañas comunitarias y actividades de organizaciones no gubernamentales orientadas a fomentar el respeto de los derechos humanos. Más concretamente, de conformidad con la Ley de Derechos Humanos del Canadá, la Comisión de Derechos Humanos de dicho país puede prestar asistencia y brindar asesoramiento con respecto a programas especiales; debe elaborar y aplicar programas de información para dar a conocer al público la Ley de Derechos Humanos del Canadá, llevar a cabo programas de investigación y realizar estudios sobre la discriminación; puede examinar las recomendaciones recibidas en relación con los derechos humanos y las libertades individuales; puede prestar asistencia y asesoramiento a fin de garantizar el cumplimiento de la mencionada ley; y debe mantenerse en estrecho contacto con los órganos o autoridades provinciales que luchan contra la discriminación. Las comisiones provinciales y territoriales de derechos humanos desempeñan funciones de educación pública y otras funciones semejantes a las que desempeña la Comisión de Derechos Humanos del Canadá.

69a. Según la información proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, en el artículo XIII, sección 17, se estableció una comisión en tanto que dependencia constitucional independiente. Poco después de ratificarse la nueva Carta, la Presidenta Corazón C. Aquino firmó la orden ejecutiva N° 163 de 5 de mayo de 1987 por la que se creó la Comisión de Derechos Humanos y se fijaron las normas para su funcionamiento. Con arreglo a dicha información, los poderes y funciones de la Comisión son los siguientes:

"Investigar por cuenta propia o por denuncia de las partes, todas las formas de violación de los derechos humanos que afecten los derechos civiles y políticos;

Aprobar sus directrices de funcionamiento y sus reglamentos, e iniciar procedimientos por toda violación de los mismos de conformidad con las normas procesales;

Fijar normas legales apropiadas para la protección de los derechos humanos de todas las personas residentes en Filipinas, así como los filipinos residentes en el extranjero y establecer medidas preventivas y de asistencia letrada y otros servicios para las personas menos favorecidas cuyos derechos humanos hayan sido violados o requieran protección;

Ejercer funciones de visita en las cárceles, prisiones y otros servicios de detención;

Aplicar un programa constante de investigación, educación e información para fomentar el respeto por la primacía de los derechos humanos;

Recomendar al Congreso medidas eficaces a fin de promover los derechos humanos y de indemnizar a las víctimas de toda violación de los derechos humanos o a sus familias;

Vigilar el cumplimiento de parte del Gobierno de Filipinas de sus obligaciones en virtud de tratados internacionales de derechos humanos;

Conceder inmunidad a toda persona cuyo testimonio o cuya posesión de documentos u otras pruebas sea necesario o conveniente para determinar la verdad en toda investigación que realice ella misma o que se lleve a cabo bajo su autoridad."

70. En algunos casos, las comisiones se crean con el único cometido de fomentar el respeto de los derechos humanos y educar a la opinión pública en esa esfera. En efecto, en 1984 Suriname comunicó que había creado una Comisión de Información y Orientación sobre Derechos Humanos. Al parecer, dicha Comisión se encargaría únicamente de prestar servicios de promoción a la comunidad a fin de sensibilizar la opinión pública sobre las cuestiones de derechos humanos. Posteriormente, Suriname manifestó su intención de dar a la Comisión atribuciones más amplias que las simples tareas de promoción y, a largo plazo, crear una institución nacional de protección y promoción de los derechos humanos conforme a la resolución 38/123 de la Asamblea General.

71. El ingrediente más importante para garantizar la eficacia de una comisión de derechos humanos parece ser la existencia de un fuerte vínculo entre la ley, la comisión y los tribunales. En primer lugar, toda comisión de derecho humanos requiere un mandato amplio y claramente codificado (previsto en la Constitución o en la legislación) para establecer su jurisdicción y garantizar su independencia estatutaria de todo control ejecutivo o parlamentario. También es necesario que pueda recurrir a los tribunales o al ministerio fiscal para hacer cumplir las recomendaciones resultantes de su investigación. Sin ese importante vínculo (entre la ley, la comisión y el tribunal), las comisiones de derechos humanos serían en gran medida impotentes. La facultad de investigar denuncias sin poder obligar a que se apliquen las recomendaciones resultantes de su investigación puede reducir a las comisiones de derechos humanos a la impotencia y, en última instancia, disuadir a los ciudadanos de recurrir a tales órganos. El propósito y la función de las comisiones de derechos humanos son muy discutibles si el ciudadano debe iniciar otro trámite, ya sea ante los tribunales o en otro organismo, después de recurrir a los buenos oficios de la comisión, en particular si se tiene en cuenta que muchas personas que han sufrido alguna forma de discriminación o violación de sus derechos pueden mostrarse renuentes a iniciar un nuevo trámite si el resultado del primero ha sido una decisión imposible de aplicar y no ha habido ninguna reparación efectiva.

72. A fin de reducir los costos administrativos (eliminando la necesidad de que los ciudadanos presenten sus denuncias a más de un organismo), de aligerar la tarea de los tribunales (resolviendo los asuntos sin el elevado costo de una investigación judicial independiente) y, sobre todo, de incitar a los ciudadanos a tratar de obtener reparación por las infracciones de sus derechos civiles y humanos, las comisiones de derechos humanos deben tener atribuciones para exigir el cumplimiento de sus recomendaciones, ya sea recurriendo a los tribunales o al ministerio fiscal, o concediendo a las comisiones poderes independientes que les permitan adoptar decisiones vinculantes.

73. Otra importantísima consideración que es preciso tener en cuenta al crear una comisión de derechos humanos es la adopción de un mecanismo adecuado para la selección equitativa de los miembros de la comisión, ya que pueden surgir dificultades si el proceso de selección es injusto. Además, el hecho de mantener vínculos estrechos con la comunidad y el disipar la imagen de las comisiones de derechos humanos como encumbrados organismos gubernamentales no puede menos de acrecentar la reputación de éstas como instituciones eficaces de protección de los derechos humanos y civiles del ciudadano ordinario.

#### B. Organismos de protección de grupos específicos

74. Reconociendo el hecho de que determinados grupos de la comunidad son objeto con excesiva frecuencia de discriminación, muchos Estados han creado instituciones con la función de proteger y fomentar los derechos de los miembros de tales grupos. Los miembros de la comunidad a quienes con más frecuencia reconocen los gobiernos la necesidad de contar con organismos especializados de derechos humanos para proteger sus intereses son las personas que pertenecen a minorías étnicas y lingüísticas, los extranjeros, refugiados, las poblaciones autóctonas, las mujeres y los niños, así como los miembros de grupos religiosos minoritarios. En la mayoría de los casos estos organismos tienen por objeto fomentar la política gubernamental y social de

protección de los derechos de estos grupos, investigar los casos y las formas de discriminación contra los miembros de los grupos y contra los grupos colectivamente, así como brindar ayuda material y asesoramiento a los miembros del grupo.

75. Por lo general tales organismos no tienen facultades para adoptar decisiones vinculantes ni incoar acciones legales. Es muy frecuente que los organismos de protección de los derechos de ciertos grupos específicos sean comisiones consultivas y asesoras del parlamento y del poder ejecutivo del gobierno y tengan la obligación de estudiar la situación de las violaciones de los derechos humanos con respecto a los grupos de que se trate. Por lo general dichos organismos se encargan también de vigilar la eficacia de las salvaguardias jurídicas y constitucionales en vigor encaminadas a proteger los derechos de determinados grupos de la comunidad y además tienen facultades para investigar las denuncias de discriminación presentadas por los miembros de la comunidad contra las autoridades estatales y locales.

1. Organismos de protección de las personas pertenecientes a minorías étnicas y lingüísticas 14/

76. En muchos Estados se han creado en los últimos decenios organismos de protección de las minorías con el fin de proteger los derechos de los miembros de los grupos étnicos y lingüísticos minoritarios, que tradicionalmente son objeto de discriminación. Por ejemplo, en Yugoslavia se han creado comisiones encargadas de estudiar los problemas concretos que afrontan las minorías y fomentar el principio de la igualdad y los derechos colectivos. Otras organizaciones de carácter análogo tienen por objeto fundamentalmente investigar las denuncias de los miembros de grupos minoritarios que acusan a las autoridades estatales o locales de prácticas discriminatorias. Por ejemplo, en el Pakistán se han organizado Comisiones de Distrito para las Minorías bajo la presidencia de Oficiales de las Minorías para tratar de reparar, a nivel local, las quejas de las comunidades minoritarias presentadas por sus representantes.

77. Cuando en 1978 se creó la Comisión de las Minorías Indias se previó un mandato amplio. Las funciones de la Comisión son:

- a) Evaluar la aplicación de las diversas garantías previstas en la Constitución y en las leyes promulgadas por los Gobiernos de la Unión y de los Estados para la protección de las minorías;
- b) Formular recomendaciones con miras a asegurar la aplicación y el cumplimiento efectivos de todas las garantías y las leyes;
- c) Iniciar un examen de la aplicación de las políticas aplicadas por los Gobiernos de la Unión y de los Estados con respecto a las minorías;
- d) Investigar denuncias concretas sobre violación de los derechos y garantías de las minorías;
- e) Realizar estudios, investigaciones y análisis sobre la cuestión de la forma de evitar la discriminación contra las minorías;



- f) Sugerir, para su adopción por los Gobiernos Central y Estatal, medidas jurídicas y de bienestar apropiadas respecto de cualquier minoría;
- g) Actuar como centro de coordinación de la información relativa a la situación de las minorías;
- h) Presentar al Gobierno informes periódicos a intervalos determinados.

78. Evidentemente, un órgano de este tipo puede tener un gran impacto sobre la política de derechos humanos del país, y sobre los problemas inmediatos que afrontan las minorías con respecto a la discriminación en la comunidad.

79. De conformidad con las disposiciones de su Constitución, Singapur ha establecido un Consejo Presidencial de los Derechos de las Minorías. El Consejo examina la información recibida del Parlamento o del Gobierno sobre cuestiones relativas a las personas pertenecientes a minorías raciales y religiosas y presenta informes al respecto. Se pide especialmente al Consejo que informe acerca de toda ley o reglamentación propuesta que pueda dar lugar a un trato discriminatorio o desigual de las personas de determinadas comunidades. Para la protección de los derechos de las minorías lingüísticas, la India ha establecido un Comisionado para las Minorías Lingüísticas. Conforme al artículo 350A de la Constitución de la India, todos los Estados deben ofrecer servicios adecuados para la instrucción en la lengua materna a nivel de la enseñanza primaria. El Comisionado Indio para las Minorías Lingüísticas investiga todas las cuestiones relativas a las salvaguardias previstas en la Constitución respecto de los derechos de las minorías lingüísticas. Se pide también al Comisionado que informe directamente al Presidente acerca de estos asuntos. Se puede citar también como ejemplo de órgano establecido para la protección de las minorías lingüísticas el sistema austríaco de comités de contacto para las minorías de habla eslovena y croata, organizados en la Cancillería Federal Austríaca. Los comités de contacto se reúnen a intervalos regulares y están integrados por miembros del Gobierno Federal, del Gobierno provincial pertinente, de los partidos políticos representados en el Parlamento y de las asambleas legislativas provinciales pertinentes. Integran también esos comités representantes de los grupos minoritarios. La función primaria de los comités es considerar medidas para la aplicación de las disposiciones del Tratado Estatal de 1955 respecto de los derechos de las minorías. Los comités se encargan también de examinar toda medida relativa a la coexistencia pacífica de los diversos grupos étnicos y pueden ocuparse de los problemas relativos a los individuos que integran los diversos grupos étnicos, o a estos grupos colectivamente.

80. Por lo que respecta concretamente a los grupos étnicos, los países con una población de orígenes étnicos diferentes, con frecuencia crean comisiones especiales destinadas a garantizar la protección de los derechos de los diversos grupos étnicos de la comunidad. Por ejemplo, en la India se otorgó al Comisionado para las Castas y Tribus Reconocidas facultades para investigar todas las cuestiones relativas a las salvaguardias previstas para las castas y tribus reconocidas en virtud de la Constitución. El Comisionado se encargaba de presentar al Presidente un informe anual, que ulteriormente se sometía a ambas Cámaras del Parlamento. Sin embargo, debido a la magnitud del problema, se organizó una Comisión de Castas y Tribus Reconocidas -integrada por un

Presidente y cuatro miembros- con el objeto de examinar con mayor eficiencia las cuestiones implicadas en la protección de los derechos de las castas y tribus reconocidas.

81. Se ha sugerido también que tales comisiones pueden ser aún más necesarias en los países étnicamente homogéneos, en que pequeños grupos étnicos prácticamente no tienen representación en el plano estatal ni local y pueden ser objeto de un alto grado de discriminación en la comunidad. Las organizaciones establecidas para proteger los derechos de tales grupos étnicos con frecuencia se encargan además de promover el respeto a las diversas culturas presentes en la comunidad. Por ejemplo, en Finlandia la Junta Asesora de Asuntos Gitanos ha elaborado proyectos para la enseñanza de la lengua, la cultura y la historia gitanas. Los sami, que habitan sobre todo en el norte de Finlandia, disponen de un Comité Especial Sami (el Parlamento sami) que se ocupa de las condiciones jurídicas, económicas, sociales y culturales de los sami así como de otras cuestiones relativas a las circunstancias tan particulares de este pueblo minoritario. Sólo los sami pueden participar en la elección de miembros de su Parlamento. El Comité no tiene derecho de decisión en las cuestiones relativas a los sami. Un ejemplo de sus recientes actividades es el proyecto de ley sobre idiomas que garantiza a los sami el derecho a usar su lengua materna en sus relaciones con las autoridades. Además de este Comité existe una Comisión de Asuntos Lapones que se ocupa de la preparación uniforme de las cuestiones relativas a la población sami. Los miembros de la Comisión representan tanto a los sami como a las autoridades encargadas de asuntos sami. La Comisión al igual que el Comité antes citado, no dispone de derecho de decisión.

## 2. Organismos de protección de las poblaciones autóctonas 15/

82. Cada vez más los países interesados han venido creando órganos para proteger y promover los derechos de las poblaciones autóctonas, que con frecuencia son objeto de discriminación, despojo de sus tierras y otros abusos de los derechos humanos.

83. Por ejemplo, en Nueva Zelandia se han creado el Departamento de Asuntos Maoríes y de las Islas y el Consejo Maorí de Nueva Zelandia, con el objeto de considerar las preocupaciones de la población maorí. El Departamento de Asuntos Maoríes y de las Islas se encarga de coordinar y aplicar la política oficial con respecto a los maoríes. El Consejo Maorí de Nueva Zelandia es un órgano consultivo, que expresa su parecer sobre todos los proyectos de ley que afecten a la población maorí. Noruega, Finlandia y Suecia han creado comisiones independientes para ocuparse de las preocupaciones y los problemas de sus respectivas poblaciones sami (anteriormente denominadas lapones). La Comisión Finlandesa de Asuntos Lapones está integrada por representantes de los Ministerios de Justicia, Educación y Agricultura, y por representantes de diversas organizaciones sami. La función principal de la Comisión consiste en asesorar al Consejo de Estado sobre las medidas propuestas para fomentar la cultura de los sami. Además, las autoridades estatales y locales consultan a la Comisión sobre todos los asuntos relativos a la población sami. La Comisión Sueca de Asuntos Sami, creada en 1970, tiene por objeto examinar los diversos problemas con que tropiezan los sami en la sociedad sueca. La Comisión se ocupa particularmente de considerar las necesidades de los sami que han dejado de ocuparse de la cría de renos y se han alejado de las zonas

de reproducción. Noruega ha establecido dos órganos para ocuparse de las cuestiones y las preocupaciones de los sami. El primero, llamado Consejo Lapón Noruego, está integrado por ocho miembros, todos ellos sami. El Consejo es sobre todo un órgano asesor, que puede formular recomendaciones sobre cuestiones relativas a la situación económica, social y cultural de los sami. Noruega ha creado también un Comité Especial, integrado por representantes del Gobierno y de los sami. El Comité, organizado como dependencia del Ministerio de Culto y Educación, examina cuestiones relativas al desarrollo educacional de los sami.

84. Otro órgano creado para ocuparse de las preocupaciones de las poblaciones indígenas es el Instituto Nacional Indigenista de México, establecido para estudiar cuestiones relativas a las poblaciones autóctonas e informar sobre la aplicación de las medidas adoptadas para mejorar la situación de las poblaciones indígenas de México.

3. Organismos de protección de los extranjeros, los migrantes y los inmigrantes

85. A fin de hacer frente a los problemas de la discriminación contra los migrantes y refugiados extranjeros, muchos países han creado organismos destinados a proteger a estas personas contra la discriminación y otros obstáculos que pueden entorpecer el pleno ejercicio de sus derechos en la comunidad. Por ejemplo, el Consejo Australiano de Asuntos Etnicos asesora al Ministerio de Inmigración y Asuntos Etnicos sobre cuestiones relativas a la integración de los migrantes en la comunidad australiana, particularmente en la esfera de los servicios de la comunidad. Además, el Gobierno australiano ha abierto dos Centros de Recursos Multiculturales a fin de brindar información y asesoramiento con el objeto de satisfacer las necesidades especiales de los inmigrantes y ofrecer información sobre la disponibilidad de prestaciones y servicios en los planos estatal y local. Los Centros tienen por objeto facilitar locales para la distribución centralizada de material de información en varias lenguas, por ejemplo, folletos sobre prestaciones de seguridad social y otra información pertinente.

86. En Bélgica se creó en 1952 la Comisión Asesora de Extranjeros. Dicha Comisión debe ser consultada por el Rey en todos los casos en que un extranjero sólo puede ser obligado a salir del país en virtud de una orden de expulsión. El Ministro de Justicia de Bélgica puede solicitar la opinión de la Comisión antes de adoptar una decisión respecto de un extranjero. Si no se consulta a la Comisión antes de adoptar una decisión cuya revisión se haya solicitado, el Ministro de Justicia debe recabar la opinión de la Comisión antes de pronunciarse sobre dicha solicitud. Análogamente, debido a la preocupación por la protección de los derechos de los inmigrantes se creó la Asociación Noruega de Trabajadores Extranjeros, que tiene por objeto salvaguardar los intereses económicos, sociales y culturales de los diversos grupos de nuevos inmigrantes de Noruega. La Asociación recibe una ayuda financiera importante del Gobierno noruego y se insiste en que se haga un mayor esfuerzo para permitir que los grupos de inmigrantes ejerzan mayor influencia en las cuestiones que les conciernen particularmente. En Suecia, la Comisión sobre los Prejuicios Etnicos y la Discriminación puede proponer al Gobierno medidas relativas al mejoramiento de la situación de los extranjeros. Por último, recientemente se ha comunicado que, para tratar de atender las necesidades de su población de refugiados cada vez mayor, Dinamarca ha creado un Directorio de Extranjeros y una Junta de Refugiados.

El Directorio es la autoridad de primera instancia en todas las decisiones relativas a la situación de los refugiados. Sus decisiones pueden ser objeto de apelación ante la Junta de Refugiados, que en sus actuaciones funciona como un tribunal. En Finlandia, el Comité de Asuntos de Refugiados del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud se encarga de las cuestiones relativas a los refugiados extranjeros en el país. El Comité de Asuntos Migratorios del Ministerio de Trabajo está encargado de la situación de los migrantes.

El Consejero de Extranjeros, tiene por misión, entre otras cosas, proporcionar información y orientación a los extranjeros en Finlandia y tomar iniciativas para consolidar su situación. Este funcionario no tiene derecho de decisión y desempeña sus funciones bajo la autoridad del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud.

#### 4. Organismos para la protección de niños y menores 16/

87. Si bien en la mayor parte de los países la protección de los derechos del niño incumbe principalmente a los padres y tutores legales, los Estados han establecido mecanismos para la protección de los niños cuyos padres no cumplen con sus deberes reconocidos, o de los niños que sean particularmente vulnerables a la explotación. Una de las preocupaciones principales de tales organismos es la explotación de los niños en el mercado de trabajo. Entre las instituciones dedicadas a prevenir el trabajo de los niños cabe mencionar el Consejo Superior de la Infancia, de Egipto, la Junta Nacional de la Infancia, de la India, el Consejo Nacional de Asuntos del Niño, de Bangladesh, el Comité Nacional Popular para la Defensa del Niño, de la China, el Consejo Nacional para la Niñez, de la República Dominicana, y el Comité Federal Mixto para la Infancia y la Juventud, de los Estados Unidos.

88. En algunos Estados, estos organismos funcionan como órganos subsidiarios del cuerpo legislativo. Por ejemplo, en la URSS, la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorrusia, las Comisiones del Soviet Supremo sobre Condiciones de Trabajo y de Vida de la Mujer, la Maternidad y el Bienestar Infantil, se ocupan de forma coordinada de todas las cuestiones relativas a los derechos del niño. Funciones análogas desempeñan la Junta de Bienestar de la Juventud, en Noruega, la Comisión de los Derechos del Niño en Suecia y la Junta de Atención a la Infancia en Barbados. En la India, la Junta Nacional del Niño, establecida de conformidad con la Resolución sobre la Política Nacional para los Niños, aprobada por la legislatura en 1974, está encabezada por el Primer Ministro. Esta Junta del Niño fue concebida como "un centro y un foro para planificar y examinar, y coordinar debidamente, los múltiples servicios destinados a atender las necesidades de los niños".

89. Muchos organismos para la protección de los niños se preocupan cada vez más por la protección social de los niños sin hogar y los niños abandonados. En Finlandia, las cuestiones relativas al cuidado y crianza de los niños están a cargo del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud y de su autoridad central subsidiaria, la Junta Nacional de Bienestar Social. Las Juntas de Bienestar Social actúan en estas cuestiones como autoridades locales. En Polonia, por ejemplo, la Sociedad de Amigos de los Niños presta especial asistencia a los hogares de niños y a las guarderías diurnas. La Asociación de Menores de México, que se ocupa de la protección social de los niños, presta asistencia moral y material a los jóvenes que han cometido delitos o están abandonados por la sociedad.

5. Organismos para la protección de la mujer

90. Los Estados han reconocido en forma creciente que se precisa de organismos que estén preparados para hacer frente al problema de la discriminación contra la mujer y su explotación. Muchas de estas organizaciones se preocupan por el alto índice de discriminación contra la mujer en la esfera del empleo. Varios de estos organismos se examinan en la sección del informe sobre los organismos que garantizan la igualdad en el empleo (véase la sección C infra). Sin embargo, otros órganos que garantizan la protección de la mujer están concebidos en forma más amplia para promover los derechos de la mujer y proteger a la mujer de la discriminación, no sólo en su lugar de trabajo, sino en todas las esferas. Entre estas organizaciones figura el Consejo Asesor Nacional de la Mujer, de Australia, que fue creado para dar a todas las australianas una voz consultiva a nivel federal con miras a proteger los intereses de la mujer en la esfera nacional. Este Consejo asesora al Gobierno Federal en materia de cuestiones que afectan a la mujer por conducto del Ministerio del Interior. Las mujeres que integran el Consejo son seleccionadas de diferentes partes del país y tienen diversos antecedentes e intereses. Para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera federal, y para vigilar la posible discriminación inherente en leyes y prácticas federales propuestas, Australia ha establecido también la Oficina de Asuntos de la Mujer. Esta Oficina se encarga además de coordinar la labor de las dependencias de asuntos de la mujer de otros departamentos. Otro organismo destinado a vigilar la posible discriminación en la ley es la Comisión de Derechos de la Mujer, creada por el Gobierno de Barbados en 1977. Esta Comisión fue establecida para examinar todos los aspectos de la ley relativos a la mujer. La Comisión presenta informes, que contienen los resultados de sus exámenes en curso, al Ministro de Justicia, cuyo Ministerio tiene un Departamento de Asuntos de la Mujer. En la India, tanto el Comité sobre la Condición Jurídica de la Mujer como el Comité Nacional de la Mujer están destinados a promover los derechos de la mujer. El Comité sobre la Condición Jurídica de la Mujer en la India se interesa principalmente en recalcar la necesidad de coordinar las actividades de los organismos y de la comunicación en la aplicación de medidas encaminadas a mejorar la condición de la mujer. El Comité Nacional de la Mujer examina en forma permanente los progresos de la aplicación de los programas para la mujer. El Comité Nacional de la Mujer es presidido por el Primer Ministro de la India, y el cargo de Vicepresidente corresponde al Ministro de Educación, Bienestar Social y Cultura. Los demás miembros del Comité Nacional son por lo general figuras públicas prominentes en la esfera de los cuestiones relativas a la mujer. En Finlandia se establecieron, a comienzos de 1987, los deberes del Ombudsman de la Igualdad encargado de vigilar el logro de la igualdad entre hombres y mujeres y de observar que se cumpliera la prohibición de toda discriminación por motivos de sexo.

91. Parecería que los organismos creados para proteger a grupos de la comunidad de los efectos nocivos de la discriminación y la explotación son parte esencial de todo programa nacional amplio para la protección y promoción de los derechos humanos. En todos los países, grupos caracterizados por la raza, la etnia, el origen nacional, la religión o el sexo, pueden estar, en diferentes medidas, sometidos a instancias y prácticas de discriminación. Cuando existe una tradición de prejuicio o de discriminación de muchos años en una comunidad, tales grupos se encuentran a menudo insuficientemente representados a nivel estatal y a nivel oficial local, y en consecuencia

pueden disponer de pocos medios, o de ninguno, de advertir a las autoridades apropiadas para que corrijan tales actos de discriminación. Además, cuando el Estado o las autoridades locales cometen actos de discriminación, puede no existir un recurso a disposición de los miembros de determinados grupos de la comunidad. Las organizaciones que se ocupan únicamente de la protección de estos grupos pueden ofrecer un recurso accesible y efectivo a los miembros de la comunidad que tradicionalmente carecen de un mecanismo administrativo eficaz en el plano estatal y local.

92. Por último, el alto índice de movimiento de refugiados y de movimientos migratorios, el continuo abuso de los derechos de tierras de las poblaciones indígenas, y el alto nivel de discriminación racial y sexual que existe en países de todo el mundo, destaca abrumadoramente la necesidad de contar con organismos especiales que se ocupen de los problemas y preocupaciones a que hacen frente determinados grupos de la comunidad, que a menudo sufren de niveles excesivamente altos de discriminación.

#### C. Organismos que garantizan la igualdad en el empleo

93. La importancia de seguir prácticas laborales justas y de la disponibilidad de recursos adecuados contra la discriminación en la esfera del empleo ha sido generalmente reconocida en todo el mundo como parte esencial de todo programa general de protección de los derechos humanos. Si bien los gobiernos asignan frecuentemente a sus ministros de trabajo para que se ocupen de las muchas cuestiones y problemas que caracterizan a la esfera del empleo, un número cada vez mayor de Estados considera que se precisa de recursos de carácter local y especializado para atender adecuadamente a las necesidades y exigencias de los trabajadores. Por ejemplo, se han establecido en muchos países tribunales laborales que concilian, negocian y juzgan las controversias derivadas de acuerdos laborales, o las que surgen entre sindicatos y empleadores.

94. Los Estados han creado asimismo comisiones u organismos administrativos, encargados de resolver problemas concretos del mercado de trabajo que pueden entrañar la violación de los derechos de algunos grupos y personas de la comunidad a un trabajo igual por una remuneración justa e igual y a condiciones adecuadas de trabajo. Estas comisiones funcionan frecuentemente bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, para ayudar a erradicar el desempleo, el Gobierno de Zimbabwe creó el Departamento del Empleo y de Promoción del Empleo, que funciona bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales. El propósito principal de este órgano es poner en conocimiento de las personas que buscan trabajo las vacantes de empleo existentes con la mayor rapidez posible, y trabajar estrechamente con otros órganos gubernamentales para tratar de crear oportunidades productivas de empleo.

95. Muchas de estas organizaciones creadas por los Estados se han establecido para ocuparse principalmente de la discriminación sexual y racial en el empleo. Las facultades y obligaciones de estas comisiones y organismos varían de país a país. Algunas veces, existen únicamente en el plano nacional, pero a menudo están organizadas en el plano nacional y local. Por ejemplo, en Australia se establecieron en 1973 comités nacionales y locales contra la discriminación en el empleo para ocuparse de los casos de discriminación a que se refiere el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Básicamente, los comités australianos contra la discriminación en el empleo examinan las cuestiones relativas a posible discriminación en la remuneración de los empleados. Las principales funciones del Comité Nacional son:

"... examinar las acusaciones de discriminación remitidas por los comités estatales (locales); examinar las acusaciones en las que el Gobierno Federal figura como empleador y las acusaciones de significación nacional; asesorar al Gobierno Federal sobre cuestiones pertinentes de política; y elaborar y promover un programa de educación de la comunidad."

Los seis Comités Estatales (Locales) investigan las acusaciones de discriminación contra los empleadores, y tratan de llegar a arreglos amistosos mediante la conciliación. Los miembros de los Comités contra la Discriminación en el Empleo de Australia son representantes del Gobierno, de las organizaciones nacionales de empleadores y del movimiento sindical, así como particulares con experiencia especial en los problemas del empleo con respecto a los aborígenes, los migrantes y las mujeres.

96. Con algunas modificaciones, la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos (EEOC) tiene facultades y obligaciones análogas. Establecida en virtud de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la EEOC fue creada para oír e investigar alegaciones de discriminación en las prácticas y procedimientos del empleo. Cuando la EEOC recibe una denuncia, la transmite al organismo estatal o local competente, que debe actuar con respecto a la denuncia en un plazo de 60 días. Si no se realiza tal acción, la EEOC se hace cargo de la denuncia, la investiga y trata de llegar a un arreglo amistoso. Si no se puede llegar a un arreglo, la EEOC está facultada para poner el caso en conocimiento del Tribunal Distrital de los Estados Unidos (Tribunal Federal) para que decida sobre el asunto, lo que no impide a la víctima del caso iniciar asimismo su propia acción judicial. Las decisiones o fallos del Tribunal constituyen precedentes jurídicamente obligatorios, que afectan la política de empleo de toda la nación. Por último, los organismos estatales y locales de la EEOC que investigan las denuncias de discriminación en el empleo están también facultados para investigar las acusaciones de acceso desigual a los servicios y vivienda públicos como consecuencia de la discriminación.

97. Algunos organismos encargados de la igualdad en el empleo funcionan como "vigilantes" para asegurar que determinadas leyes relativas al empleo y al trabajo se cumplan plenamente. Como ejemplo de tal organismo, se puede mencionar los Comités de Vigilancia de la India. Estos comités fueron creados en virtud de la Ley por la que se suprimió el sistema de servidumbre por deudas, de 1976. Los Comités de Vigilancia están integrados por funcionarios, representantes de la localidad, trabajadores sociales e instituciones financieras y de crédito. Sus funciones básicas son asesorar a las autoridades distritales acerca de la aplicación de la Ley que prohíbe la práctica de la servidumbre por deudas, examinar los delitos cometidos en violación de la Ley y formular recomendaciones acerca de si se deben tomar medidas con respecto a estos delitos. El Comité defiende también los procesos entablados por servidumbre por deudas.

98. A menudo las comisiones y organismos encargados de garantizar la igualdad en el empleo desempeñan también servicios de asesoramiento. Como se ha dicho anteriormente, el Comité Nacional Australiano contra la Discriminación en el Empleo asesora al Gobierno Federal en materia de política del empleo y política laboral. Análogamente, se establecieron en la India Comités Asesores Tripartitos, integrados por representantes del Gobierno, de los empleadores y de los empleados, para asesorar al Gobierno acerca de la formulación de la política laboral y para asegurar la aplicación de las leyes laborales. El Consejo Supremo para la Igualdad Profesional entre Hombres y Mujeres de Francia, establecido en 1983, es también un órgano asesor. El Gobierno consulta al Consejo Supremo sobre proyectos de ley y de decretos destinados a garantizar la igualdad profesional entre hombres y mujeres, así como acerca de leyes que tratan de las condiciones particulares de trabajo de los distintos sexos. El Consejo puede también hacer propuestas destinadas a mejorar la igualdad profesional entre los sexos.

99. Los organismos que garantizan la igualdad en el empleo deben también, en muchos casos, incluir actividades destinadas a promover la igualdad en la esfera del empleo como parte de sus funciones básicas. Por ejemplo, el Consejo de Igualdad Danés y la Comisión Portuguesa de la Condición de la Mujer están encargados de promover la igualdad entre los sexos en el empleo y en la formación profesional. La EEOC de los Estados Unidos propone planes de contratación de acción afirmativa a los empleadores de las industrias para que los adopten en forma voluntaria. Una vez que los empleadores aceptan esos planes, se convierten en obligatorios. En Finlandia el Ombudsman de la Igualdad está encargado de promover la situación de las mujeres en materia de empleo y de asegurar que los empleadores actúen conforme a sus responsabilidades en relación con la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en muchos países la promoción de la igualdad en el empleo es responsabilidad de las comisiones de derechos humanos y de derechos civiles.

100. El papel que las comisiones que garantizan la igualdad en el empleo desempeñan en la supresión de la discriminación en el lugar del empleo es evidentemente un factor importante para la protección de los derechos humanos y civiles de la persona. Si bien es a menudo responsabilidad de las comisiones de derechos humanos resolver las cuestiones relativas a la discriminación en el empleo, la existencia generalizada de discriminación en la esfera de las relaciones laborales parece corroborar la idea de que se necesitan organismos separados, destinados a ocuparse únicamente del empleo y de las cuestiones laborales, para proteger el derecho del individuo a trabajar en un medio libre de discriminación. Además, organismos integrados por empleadores y trabajadores desempeñan un papel importante asesorando a los gobiernos acerca de las necesidades de la comunidad de trabajadores. La discriminación en el empleo es una de las violaciones más perniciosas de los derechos humanos, ya que socava los propios medios de vida del individuo y frecuentemente da origen a una reacción en cadena de circunstancias financieras y sociales que a menudo exponen al individuo a ulterior explotación. Por lo tanto, los organismos que pueden resolver los problemas de discriminación que surgen exclusivamente en el lugar de trabajo constituyen un servicio esencial para la protección de los derechos humanos.



#### IV. EL OMBUDSMAN 17/

101. Sería difícil clasificar al ombudsman como órgano legislativo judicial o administrativo. A decir verdad, se trata de una institución sui generis, de carácter polifacético. El ombudsman es un mediador independiente -y en algunos países un órgano colegiado- cuya función principal es proteger los derechos del individuo que considera que ha sido víctima de un acto injusto de la administración pública. El ombudsman es generalmente nombrado por el órgano legislativo y funciona en muchos casos en calidad de órgano supervisor en nombre del Parlamento. Interviene en caso de quejas contra funcionarios u organismos gubernamentales recibidas de la persona agraviada. El ombudsman está considerado a veces como una institución de origen escandinavo ya que surgió a principios del siglo XIX en Suecia y está firmemente arraigado en Dinamarca, Noruega y Finlandia. En los últimos decenios, sin embargo, se ha establecido el cargo de ombudsman o negociador en diversos países fuera de Escandinavia. Australia, Austria, Barbados, Canadá, España, Francia, Ghana, Guyana, India, Jamaica, Japón, Mauricio, Nueva Zelandia, Portugal, el Reino Unido, Trinidad y Tabago, y ciertos Estados de los Estados Unidos han utilizado todos ellos el sistema del ombudsman en una u otra forma. Además, varios países africanos (Nigeria, el Sudán, Tanzania y Zambia) han establecido órganos colegiados o comisiones que funcionan con las atribuciones y competencia del ombudsman.

102. Esencialmente, el ombudsman sigue en todos los países procedimientos similares en el desempeño de sus funciones. Recibe las quejas de la parte agraviada y posteriormente inicia una investigación si la denuncia está fundada y está dentro de su competencia. En general, se concede al ombudsman acceso a los documentos de todas las autoridades en el marco de su jurisdicción que son pertinentes para la investigación. El ombudsman formula entonces una recomendación basada en su investigación, que se entrega al denunciante y a la oficina o autoridad contra la que se ha presentado la denuncia. Si no se da curso a esta recomendación, el ombudsman puede someter su recomendación al Parlamento. En los países escandinavos, el ombudsman puede también convocar a ambas partes en la investigación a una audiencia en caso necesario. Está facultado para interrogar a los testigos bajo juramento. En Suecia, la investigación del ombudsman generalmente da lugar a una carta dirigida a ambas partes en la que expresa su opinión respecto a la conducta del funcionario y expone su interpretación de la ley en cuestión. Puede recomendar que se pague una indemnización a la parte lesionada, a costa del funcionario o con cargo a fondos públicos. En casos excepcionales que impliquen faltas graves, el ombudsman puede en Suecia ordenar el procesamiento ante los tribunales. En casos de menor importancia en que de la investigación se desprende que ha habido faltas, retrasos o negligencia, el ombudsman puede enviar un recordatorio al funcionario interesado indicando que su actuación en el caso ha sido inadecuada o defectuosa.

103. Además, en casi todos los países, el ombudsman presenta un informe anual al Parlamento o al órgano legislativo correspondiente. Cada país puede pedir al ombudsman que incluya en su informe información o recomendaciones específicas. Por ejemplo, el informe anual del ombudsman de Suecia puede incluir una opinión sobre las deficiencias de la legislación, así como sus opiniones sobre el sentido de las leyes y estatutos vigentes y la forma en que deben interpretarse y aplicarse. Puede también sugerir nuevas disposiciones

legislativas. Asimismo el ombudsman en Francia, el Mediador, puede sugerir en sus informes enmiendas a las leyes y reglamentos. El Volksanwaltschaft en Austria puede someter recomendaciones a las autoridades ejecutivas superiores, además de su informe anual sobre las actividades, que se presenta al Nationalrat.

104. Aunque el ombudsman presente sus informes anuales al Parlamento, esencialmente se trata de un cargo independiente. El cargo de ombudsman está generalmente establecido en la Constitución o en virtud de un acto de la asamblea legislativa. Como tal, el ombudsman debe responder ante la asamblea legislativa y en la mayoría de los casos ésta llevará a cabo una revisión anual de sus actividades. Pese a esta revisión anual a cargo del parlamento o del poder ejecutivo, el ombudsman disfruta de una independencia relativa. Por ejemplo, el ombudsman de Suecia no puede ser destituido de su cargo a menos que un comité parlamentario formule una petición en ese sentido. En el Reino Unido, el comisionado parlamentario (ombudsman) está también sujeto a la revisión del comité selecto de la Cámara de los Comunes, pero sólo puede ser destituido a petición de ambas cámaras del Parlamento.

105. El ombudsman es a veces responsable ante el poder ejecutivo. Por ejemplo, en tanto que la Comisión de Reclamaciones Públicas de Nigeria y la Asamblea Popular para el Control Administrativo del Sudán son responsables ante el Parlamento, la Comisión Permanente de Investigaciones de Tanzania y la Comisión de Investigaciones de Zambia son directamente responsables ante el Jefe de Estado.

106. En la mayoría de los casos, el ombudsman inicia una investigación sobre la base de una reclamación recibida en su oficina. Sin embargo, puede iniciar una investigación sin que exista esta reclamación. Por ejemplo, en Suecia, el ombudsman con frecuencia puede comenzar la investigación sobre la base de un artículo periodístico acerca de las ilegalidades y la mala administración. En Francia el Mediador puede también iniciar una investigación sin que haya una reclamación ya que se concede a los miembros del Parlamento el derecho a pedir que el Mediador investigue un asunto que preocupa al Parlamento. En algunos países se limita el recurso al ombudsman a los casos en que el denunciante ha sufrido realmente un daño imputable al acto o autoridad denunciados. Este requisito se exige en Guyana y en Trinidad y Tabago. En Austria, sin embargo, pueden recurrir al Volksanwaltschaft los no ciudadanos y los ciudadanos "preocupados por supuestos abusos en la administración del Bund". En España se exige simplemente que el denunciante afirme tener un interés legítimo en la reclamación.

107. Varios países (Austria, Jamaica, Nueva Zelanda y el Reino Unido) exigen que el denunciante haya agotado previamente todos los otros posibles recursos legales antes de dirigirse al ombudsman. Aunque en general no existe un plazo de prescripción para presentar una reclamación al ombudsman, con frecuencia se exige que la reclamación se haga durante el año siguiente a la notificación de la decisión denunciada. No obstante, algunos ombudsman tienen poder discrecional para examinar casos más antiguos.

108. Las posibilidades de acceso de un particular al ombudsman varían de un país a otro. En muchos países (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia, Tanzania y Zambia, por ejemplo) los particulares pueden

presentar directamente sus reclamaciones a la oficina del ombudsman. En Israel se dispone además que el ombudsman puede recibir quejas confidenciales por escrito de los detenidos. Sin embargo, en Francia, el Reino Unido y en el Sudán las denuncias deben presentarse a un miembro del Parlamento, quien remite al ombudsman las denuncias que son de su competencia. El Mediador en Francia, por ejemplo atiende las reclamaciones de particulares dirigidas primeramente a los diputados o senadores quienes las transmiten al Mediador. En la práctica, los miembros del Parlamento generalmente remiten todas las reclamaciones recibidas al ombudsman. Los denunciadores cuyo caso no es de la competencia del ombudsman pueden recibir una comunicación de su oficina explicando que el ombudsman no puede tomar ninguna medida respecto a su reclamación.

109. Las reclamaciones dirigidas al ombudsman son generalmente confidenciales, y no se puede revelar la identidad del denunciante sin su consentimiento. La mayoría de los países no revelan en el informe anual del ombudsman la identidad del denunciante ni la del funcionario contra quien se ha presentado la reclamación. Sin embargo, en Suecia, una vez completado un caso, el expediente del ombudsman está generalmente a disposición de la prensa para que lo inspeccione.

110. La competencia del ombudsman se extiende en general a todos los cargos de la administración pública. No obstante, el alcance de la jurisdicción del ombudsman varía de un país a otro. Por ejemplo, en Finlandia y Dinamarca el ombudsman está investido de autoridad sobre los ministros. En Austria, Australia, Nueva Zelandia y Suecia, no se permite al ombudsman investigar las denuncias contra los ministros. La Comisión Permanente de Tanzania tiene jurisdicción sobre el Gobierno central y local, y prácticamente sobre todos los órganos estatutarios, así como sobre los partidos y sus miembros. Sin embargo, la Comisión no tiene jurisdicción sobre las decisiones presidenciales o en las cuestiones de política gubernamental u oficial. En Nigeria, pueden dirigirse a la Comisión de Reclamaciones Públicas, denuncias contra los departamentos gubernamentales, funcionarios, empleadores y empleados, contra particulares en el sector público o en el sector privado, contra las autoridades gubernamentales y del Estado y contra las autoridades locales. El Comité de la Asamblea Popular del Sudán puede investigar cualquier denuncia en que se alegue que una decisión de la administración es el resultado de: a) nepotismo, corrupción o perjuicio, b) inobservancia de las prácticas administrativas adecuadas, c) negligencia en el desempeño de las funciones, d) abuso de la facultad discrecional, e) incompetencia, f) pérdida de documentos, g) retrasos y demoras, h) segregación injusta o i) cualquier motivo similar. La Comisión Parlamentaria del Reino Unido está facultada para investigar los casos de mala administración en la mayoría de los departamentos y autoridades que tratan con el público. La mala administración se define en el sentido de incluir la incompetencia, retraso, negligencia y perjuicio, pero no las cuestiones de política. Las cuestiones de política corresponden a la competencia del Parlamento. El Comisionado no tiene facultades para investigar el fundamento de las decisiones discrecionales. Tampoco se extiende su jurisdicción a los servicios nacionales de sanidad, gobierno local o policía, ya que existen otros órganos facultados para investigar las denuncias contra estas instituciones. En Nueva Zelandia, el ombudsman tiene jurisdicción sobre los actos u omisiones de los departamentos de Estado, un

reducido número de tribunales administrativos estatutarios y las organizaciones locales. No tiene control sobre ninguna cuestión en que exista un derecho de recurso o revisión respecto del fondo del asunto ante cualquier tribunal, ni control directo sobre un ministro, ni puede modificar una decisión que considere errónea. En Finlandia, en la República Unida de Tanzania y en Suecia, el ombudsman puede investigar las reclamaciones contra el poder judicial. En otros países, tales como Austria, Dinamarca y Noruega, los jueces quedan totalmente excluidos de la jurisdicción del ombudsman, ya que existe una gran preocupación por mantener la independencia de los tribunales.

111. En los países en que el ombudsman tiene facultades de supervisión sobre los ministros, las autoridades competentes deben prestar su apoyo al ombudsman en el ejercicio de su investigación, incluso facilitándole todos los documentos y testimonios requeridos. Sin embargo, pese a este requisito, en alguno de los casos los ministros pueden negarse a facilitar información al ombudsman si, a juicio del ministro, la divulgación de esta información fuese perjudicial para la seguridad o la defensa nacional. A fin de impedir los abusos de esta excepción por los ministros, el Reino Unido introdujo una disposición en su Ley del Comisionado Parlamentario que concede al ombudsman acceso a toda la información pertinente para su investigación, pero que también otorga al ministro la facultad de prohibirle que revele en su informe cualquier información que a juicio del ministro fuese "perjudicial para la seguridad del Estado o contraria por otro motivo al interés público".

112. La responsabilidad de sensibilizar la conciencia del público acerca de los deberes y funciones del cargo parece corresponder a la propia oficina del ombudsman. Para informar al público sobre la existencia del ombudsman como recurso importante se utilizan mensajes radiofónicos, folletos y documentales de televisión acerca de la historia y la función del ombudsman. Por ejemplo, en Tanzania y en Zambia las comisiones de ombudsman celebran reuniones públicas en las aldeas y zonas rurales para explicar la labor que realizan sus comisiones y para promover las posibilidades de acceso de los individuos que residen en zonas alejadas y que tienen reclamaciones que formular contra los funcionarios públicos. Después de estas reuniones públicas, los representantes de la comisión celebran sesiones privadas en las que las partes agraviadas pueden exponer sus quejas. Estas quejas se investigan posteriormente y, en caso necesario, se realizan visitas adicionales a las aldeas para proseguir los contactos. En su primer año, los miembros de la comisión de Tanzania visitaron 14 regiones, 53 distritos y se dirigieron a más de 64.000 personas.

113. El ombudsman es un órgano de derechos humanos que puede resultar muy eficaz y que puede adaptarse a diversos sistemas políticos y sociales. Muchos países han incorporado con éxito el ombudsman en sus sistemas administrativos. Naturalmente, el cargo de ombudsman sólo puede tener la eficacia que le permitan sus atribuciones y su competencia. Si bien los distintos países difieren en cuanto a la amplitud de la competencia que confieren a este cargo, es evidente, por ejemplo, que el derecho a examinar los documentos y a interrogar a las autoridades dentro de los límites de dicha competencia parece esencial para llevar a cabo una investigación completa y exacta. Además, la eficacia del cargo de ombudsman depende en gran medida de

la posibilidad de que un presunto denunciante utilice los servicios que ofrece el ombudsman. Así pues, es importante que no se someta a los particulares a un complicado procedimiento de reclamación cuando tratan de exponer sus quejas al ombudsman. Aunque es cierto que la mayoría de los ombudsmen pueden iniciar las investigaciones de oficio, independientemente de cualquier reclamación de un particular, la función primordial del cargo es ofrecer un recurso a los particulares que han sido víctimas de injusticias como resultado de una acción gubernamental o administrativa. Por tal razón, debe hacerse todo lo posible para que la oficina del ombudsman sea de fácil acceso a todos los miembros del público.

V. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 18/

114. Muchos gobiernos han destacado la importante función y el gran éxito de las organizaciones no gubernamentales en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional. Para alcanzar el objetivo de estas organizaciones, se han utilizado una gran diversidad de técnicas, incluidos los seminarios, simposios y otras reuniones, la publicación de folletos y revistas periódicas, las actividades educativas y las campañas de los medios de comunicación destinadas a sensibilizar a la opinión pública. Al exponer las violaciones de derechos humanos atraen la atención del público hacia ellas. Además, los enlaces y otros contactos establecidos por estas organizaciones con las ramas legislativa, administrativa y judicial del gobierno y la asistencia y los servicios concretos que ofrecen a las personas o grupos vulnerables, tales como detenidos, refugiados, trabajadores extranjeros, minorías y poblaciones indígenas, contribuyen a asegurar una aplicación más estricta de las leyes y reglamentos relativos a la protección de los derechos humanos.

Notas

- 1/ Véase también cap. II, sec. B.
- 2/ A/36/440, párrs. 18 a 46, A/38/416, párrs. 10 a 26, A/39/556.
- 3/ A/36/440, párrs. 38 a 46.
- 4/ Véanse los párrafos 17 y 18 que anteceden.
- 5/ A/38/416, párrs. 10 a 26.
- 6/ Véase A/36/440, párrs. 190 a 201, A/38/416, párrs. 27 a 42.
- 7/ Véase A/38/416, párrs. 145 a 152.
- 8/ A/36/440, párrs. 120 a 130, 202 a 206, A/38/416, párrs. 153 a 156.
- 9/ A/36/440, párrs. 26 a 36, A/38/416, párr.26,
- 10/ A/36/440, párrs. 69 a 72, A/38/416, párrs. 61 y 62.
- 11/ A/36/440, párrs. 65 a 68, A/38/416, párrs. 59 y 60.
- 12/ A/36/440, párrs. 92 a 115, A/38/416, párrs. 76 a 81.
- 13/ A/36/440, párrs. 86 a 91, A/38/416, párrs. 63 a 75.
- 14/ A/36/440, párrs. 131 a 145. Véase también Estudios sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.78.XIV.1).
- 15/ Véase E/CN.4/Sub.2/1982/Add.4.
- 16/ Véase también cap. II, sec. C.
- 17/ A/36/440, párrs. 47 a 64, A/38/416, párrs. 43 a 58.
- 18/ A/36/440, párrs. 146 a 151, 215 a 217, A/38/416, párrs. 87 a 92, 166.

Anexo I

LISTA DE INSTITUCIONES NACIONALES\*

I. ORGANOS LEGISLATIVOS ESTABLECIDOS PARA EXAMINAR  
LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

A. Organos legislativos

- Comité Especial 1/
- Comisión Consultiva (o comisión investigadora) 2/
- Oficina de Peticiones y Apelaciones 3/
- Dependencia de Protección de Libertad Civil 4/
- Comisión Consultiva de Derechos Humanos 5/
- Comisión de Información y Orientación sobre Derechos Humanos 6/
- Comisión General de Peticiones 7/
- Comisión legislativa constitucional y de justicia 8/
- Arreglos de Comité 9/
- Comisión de Peticiones 10/
- Comisión Permanente Constitucional 11/
- comisión Permanente de Peticiones 12/
- Derecho y Justicia 13/
- Cámara de los Comunes 14/
- Congreso de los Estados Unidos 15/
- Comisión de Derechos Humanos 16/
- Dependencia de solución de litigios 17/
- Liga para la defensa y la promoción de los derechos humanos 18/
- Cámara Baja 19/

---

\* La presente lista de instituciones nacionales se establece de acuerdo con la información presentada por los gobiernos.

1/ España y los Estados Unidos; 2/ Barbados; 3/ Yugoslavia;  
4/ Tailandia; 5/ Francia; 6/ Suriname; 7/, 8/ España; 9/ Finlandia; 10/ India,  
Reino Unido; 11/, 12/ España; 13/ Portugal; 14/ Reino Unido;  
15/ Estados Unidos; 16/ El Salvador; 17/ Tailandia; 18/ Madagascar;  
19/ Finlandia.



Parlamento 20/

Comité Parlamentario de derecho constitucional 21/

Presídium del Soviet Supremo 22/

Comisionado de la vida privada 23/

Comité de peticiones públicas 24/

Comité Selecto de Asuntos Estatutarios 25/

Comité Selecto del Senado 26/

Comisión Permanente 27/

Comisión Permanente de Peticiones 28/

Corte Suprema 29/

Comité Legal Surate 30/

Comisionado de la información confidencial del Centro de Computadoras de Wanganui 31/

B. Organos establecidos para examinar la  
constitucionalidad de las leyes

Consejo constitucional 32/

---

20/ Finlandia, Francia, Nueva Zelandia, Polonia; 21/ Finlandia, 22/ URSS, 23/, 24/ Nueva Zelandia; 25/ Reino Unido; 26/ Estados Unidos; 27/ República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania y URSS; 28/ España; 29/ Polonia; 30/ Zimbabwe; 31/ Nueva Zelandia; 32/ Hungría.

## II. ORGANOS JUDICIALES

### A. Tribunales de jurisdicción general

Tribunal de Apelaciones 1/  
Tribunal de asuntos penales 2/  
Canciller de Justicia 3/  
Cámara de Apelaciones 4/  
Tribunales distritales de apelaciones 5/  
Tribunales comunes 6/  
Consejero de Estado 7/  
Consejo Constitucional 8/  
Tribunal Constitucional 9/  
Carta de Garantías Constitucionales 10/  
Tribunal Constitucional 11/  
Consejo de Estado 12/  
Tribunales de condado 13/  
Tribunales de Apelación en lo Penal 14/  
Tribunal de la Corona 15/  
Defensor del Pueblo 16/  
Tribunales distritales 17/  
Tribunal Constitucional Federal 18/

---

1/ Finlandia, Francia, Reino Unido, Singapur, 2/ Francia, 3/ Finlandia, 4/ Francia, 5/ Estados Unidos, 6/ Polonia, 7/ Venezuela, 8/ Francia, 9/ Canadá, El Salvador, Guatemala, España, India, Panamá, República Federal de Alemania, 10/ Ecuador, 11/ Tailandia, 12/ Francia, 13/ Reino Unido, 14/ Singapur, 15/ Reino Unido, 16/ España, 17/ Singapur, 18/ República Federal de Alemania.

Tribunales Federales 19/

Tribunal Superior 20/

Cámaras de los Lores 21/

Tribunales de Magistrados 22/

Ombudsman Parlamentario 23/

Tribunal Supremo 24/

Tribunal Supremo de Apelaciones 25/

B. Tribunales constitucionales

Acción Popular de Inconstitucionalidad 26/

Tribunal Constitucional 27/

Tribunal de Garantías Constitucionales 28/

Organos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas 29/

Tribunal Superior 30/

Defensor del pueblo 31/

Tribunal Supremo 32/

Tribunal Supremo Electoral 33/

---

19/ Canadá, Estados Unidos; 20/ Argentina, Barbados, Colombia, El Salvador, España, India, Nigeria, Panamá, Reino Unido, Singapur, Venezuela; 21/ Reino Unido; 22/ Reino Unido, Singapur; 23/ Finlandia; 24/ Canadá, Chipre, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, India, Nigeria, Panamá, Papua Nueva Guinea, República Federal de Alemania, Singapur, Sri Lanka, URSS; 25/ Francia; 26/ El Salvador, Panamá, Venezuela; 27/ Canadá, El Salvador, España, India, Panamá, República Federal de Alemania; 28/ Ecuador, 29/, 30/, 31/, 32/ España; 33/ Ecuador.

C. Tribunales y Cortes Especiales

1. Tribunales de trabajo

Tribunal de Trabajo 34/

Tribunal Central del Trabajo 35/

Tribunales de conciliación laboral (Conseils de Prud-hommes) 36/

Consejo de Estado 37/

Defensor del Pueblo 38/

Tribunal de Seguros 39/

Tribunal del Trabajo 40/

Junta de Relaciones Laborales 41/

Tribunal de Autogestión 42/

Tribunal Especial 43/

Tribunal Supremo Administrativo 44/

Comisiones de Mediación de Trabajadores 45/

2. Tribunales de menores

Tribunal Superior de Menores 46/

Tribunales de niños y jóvenes 47/

Junta de Menores 48/

Cortes de Menores 49/

Tribunales de menores 50/

---

34/ Noruega, 35/ Tailandia, 36/ Francia, Túnez, 37/ Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, 38/ España, 39/ Finlandia, 40/ Barbados, Finlandia, India, Kenya, Papua Nueva Guinea, República Federal de Alemania, Tailandia, 41/ Canadá, 42/ Yugoslavia, 43/ Francia, Países Bajos, 44/ Finlandia, Polonia, 45/ Polonia, 46/ Francia, 47/, 48/ Nueva Zelandia, 49/ Australia, 50/ Australia, Francia, Tailandia.

Tribunal Superior de menores 51/

Tribunal de menores 52/

Tribunal Penal de Menores 53/

Tribunal Especial de Menores 54/

3. Otros tribunales especiales

Tribunal de Radiodifusión 55/

Tribunal de Examen de las Deportaciones 56/

Tribunales de Familia 57/

Tribunal de Publicaciones Indecentes 58/

Tribunal Maorí 59/

Tribunal de Tierras Maorí 60/

Ministerio Fiscal 61/

Tribunal de Seguro Social 62/

D. Cortes y Tribunales administrativos

Tribunales Administrativos 63/

Consejo de Estado 64/

Tribunal de Casación 65/

Corte Suprema Administrativa 66/

E. Otros órganos establecidos en el marco del sistema judicial

1. Ombudsman e instituciones semejantes

Arbitro Especial 67/

Asambleas de Comunidades Sociopolíticas 68/

---

51/ Francia, 52/ Barbados, El Salvador, Francia, 53/ Túnez, 54/ Italia, 55/, 56/ Nueva Zelandia, 57/ Australia, 58/, 59/, 60/ Nueva Zelandia, 61/ España, 62/ Noruega. 63/ Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Países Bajos, Túnez, 64/, 65/ Francia, 66/ Finlandia, 67/ Fiji, 68/ Yugoslavia.

Ombudsman de la Infancia 69/

Protección del Ombudsman Civil contra la arbitrariedad en la  
administración pública 70/

Comisión de Lucha contra la Corrupción 71/

Comisión de Investigación 72/

Comisión de Supervisión de la Autogestión de los Trabajadores 73/

Comisionado de Igualdad de Oportunidades 74/

Consejo de Igualdad de Oportunidades 75/

Mediador 76/

Ministerio Público 77/

Comisión Pública Nigeriana de Reclamaciones 78/

Ombudsman 79/

Corte Suprema de Justicia (Ley Orgánica) 80/

Arbitro Permanente 81/

Comisión Permanente de Investigación 82/

Procuraduría 83/

Fiscal 84/

Proveedor de Justicia 85/

Comisión de Reclamaciones Públicas 86/

Servicio del Proveedor de Justicia 87/

Procurador Social de Autogestión 88/

---

69/, 70/ Noruega, 71/ Tailandia, 72/ Tanzania, 73/ Yugoslavia,  
74/, 75/ Noruega, 76/ Francia, 77/ Colombia, Ecuador, Guatemala, Portugal,  
Venezuela, 78/ Nigeria, 79/ Australia, Austria, Barbados, Canadá, Dinamarca,  
España, Estados Unidos, Fiji, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala, Guyana,  
India, Jamaica, Japón, Mauricio, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal,  
Reino Unido, República Federal de Alemania, Sudán, Suecia, Tanzania, Trinidad  
y Tabago, Zambia, Zimbabwe, 80/ Venezuela, 81/ Fiji, 82/ Tanzania,  
83/ Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática  
Alemana, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Rumania, URSS, Yugoslavia,  
84/ Finlandia, 85/ Portugal, 86/ Nigeria, 87/ Portugal, 88/ Yugoslavia.

Comisiones Sociales de Emigración 89/

Comisión de Información confidencial del Centro de Computadoras  
Wauganui 90/

Volksanwaltschaft 91/

Consejo de Trabajadores de las Empresas 92/

Consejos de Mediación de las Empresas 93/

2. Servicios de asistencia letrada

Dependencia de Libertades Civiles y de Protección de los Intereses  
Públicos 94/

Oficina de Asistencia Letrada 95/

Colegios de Abogados 96/

Servicios Jurídicos de la Comunidad 97/

Asociación de Asistencia Letrada 98/

Junta de Asistencia Letrada 99/

Oficina del Consejo de Asistencia Jurídica 100/

Reglamentación de Asistencia Letrada para los Juicios Públicos 101/

Reglamentación del Servicio de Asistencia Letrada Expedida por el Fiscal  
Público 102/

Dependencia de Asistencia Letrada 103/

Centros de Servicios Jurídicos Maluganik Tukisiiniakvit 104/

Asociación de Funcionarios judiciales indígenas 105/

Oficina del Defensor Público 106/

Asistencia Pública Letrada 107/

---

89/ Polonia; 90/ Nueva Zelandia; 91/ Austria; 92/ Yugoslavia;  
93/ Polonia; 94/ Tailandia; 95/ Filipinas; 96/ RSS de Bielorrusia,  
RSS de Ucrania, URSS; 97/ Barbados; 98/ Japón; 99/ Finlandia; 100/ Nigeria;  
101/, 102/, 103/ Tailandia; 104/, 105/ Canadá; 106/, 107/ Estados Unidos.

III. ORGANOS ADMINISTRATIVOS

A. Comisiones de derechos humanos y organismos públicos semejantes  
a los que se ha encomendado expresamente funciones generales  
en la esfera de los derechos humanos

Organo de Asesoramiento de la Comisión de Derechos Humanos de la  
Secretaría Federal de Asuntos Exteriores 1/

Comisión Austríaca de Juristas 2/

Miembros de la Junta 3/

Comisión de Derechos Humanos del Canadá 4/

Ley de Derechos Humanos del Canadá 5/

Departamento Central de Libertades Civiles del Ministerio de Justicia 6/

Departamento de Libertades Civiles 7/

Dependencia de Protección de las Libertades Civiles 8/

Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados 9/

Comisión de Derechos Fundamentales 10/

Comisión de Información y Orientación sobre Derechos Humanos 11/

Comisionado de Relaciones de la Comunidad 12/

Comités de Menores 13/

Comités sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  
Culturales 14/

Comités sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 15/

Centro de Informaciones Computadorizadas 16/

Consejo de Protección de Derechos Humanos 17/

División Danesa de Derechos Humanos 18/

Departamento de la Secretaría de Estado 19/

Directorio de Derechos Humanos del Departamento de Estado 20/

---

1/ Yugoslavia; 2/ Austria; 3/, 4/, 5/ Canadá; 6/, 7/ Japón; 8/ Tailandia;  
9/ Portugal; 10/ Nueva Zelandia; 11/ Suriname; 12/ Australia; 13/ URSS;  
14/, 15/ Iraq; 16/ Nueva Zelandia; 17/ Brasil; 18/ Dinamarca; 19/, 20/ Canadá.



Comités Distritales de Minorías 21/  
Comisión Federal de Derechos Humanos 22/  
Comité Federal-Provincial de Funcionarios encargados de Derechos Humanos 23/  
Comités Federales-Provinciales-Territoriales 24/  
Dependencia de Asuntos Exteriores y de Relaciones Públicas 25/  
Comisión de Derechos Humanos 26/  
División de Derechos Humanos 27/  
Sociedad de Derechos Humanos 28/  
Tribunal de Derechos Humanos 29/  
Comité Interministerial Italiano de Derechos Humanos 30/  
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Iraq 31/  
Comisión Nacional para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos 32/  
Comité Nacional de Derechos Humanos 33/  
Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 34/  
Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia 35/  
Comité Noruego de Derechos Humanos 36/  
Junta de Reclamaciones de la Policía 37/  
Comisiones Provinciales de Derechos Humanos 38/  
Comité Sami 40/  
Comité Jurídico del Senado 41/

---

21/ Pakistán; 22/, 23/, 24/ Canadá; 25/ Tailandia; 26/ Australia; 27/ Israel; 28/ Pakistán; 29/ Canadá; 30/ Italia; 31/ Iraq; 32/ Nicaragua; 33/ Iraq; 34/ Suriname; 35/ Nueva Zelandia; 36/ Noruega; 37/ Reino Unido; 38/, 39/ Canadá; 40/ Finlandia; 41/ Zimbabwe.

Comisión Consultiva Permanente de Derechos Humanos 42/

Comités de Supervisión 43/

Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos 44/

Comisiones de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos 45/

Juntas Voluntarias de Prevención del Delito 46/

Milicias Populares Voluntarias 47/

---

42/ Irlanda del Norte; 43/ URSS; 44/, 45/ Estados Unidos; 46/ URSS, 47/ RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, URSS.

B. Organismos para la Protección de Determinados Grupos

1. Organismos para la protección de personas que pertenecen a minorías étnicas, lingüísticas y religiosas

Junta Asesora de Asuntos Gitanos 1/

Comité Consultivo 2/

Cancillería Federal Australiana 3/

Instituto Australiano de Asuntos Multiculturales 4/

Consejo Central de los Sinti y los Rom Alemanes 5/

Comisión Consultiva para los Refugiados 6/

Comisión para Promover el Principio de la Igualdad y los Derechos Colectivos 7/

Comisión de Asuntos Lapones 8/

Comisión de Igualdad Racial 9/

Comisión Interministerial de Apoyo a los Refugiados y Apátridas 10/

Comisión de Menores 11/

Comisión de Derechos Civiles 12/

Comisionado para las Minorías Lingüísticas 13/

Comisionado para las Castas y Tribus Reconocidas 14/

Comité de Asuntos de Refugiados 15/

Comité de Minorías de Habla Eslovena y Croata 16/

Comité de Investigación de la Educación de Menores 17/

Comité de Asuntos de Migración 18/

Consejero de Extranjeros 19/

---

1/ Finlandia; 2/ Pakistán; 3/, 4/ Australia; 5/ República Federal de Alemania; 6/ Portugal; 7/ Yugoslavia; 8/ Finlandia; 9/ Reino Unido; 10/ Portugal; 11/ RSS de Ucrania; 12/ Estados Unidos; 13/, 14/ India; 15/ Finlandia; 16/ Austria; 17/ Reino Unido; 18/, 19/ Finlandia.

Instituto Cubano de Amistad 20/

Comités Etnicos y Religiosos 21/

Comités de Distrito para las Minorías 22/

Organismo de Empleo Justo 23/

Sociedad de Derechos Humanos 24/

Comisión de las Minorías Indias 25/

Comisión Mexicana de Asistencia a los Refugiados 26/

Junta Nacional de Bienestar Social 27/

Comités Nacionales 28/

Oficina del Comisionado de Relaciones Comunitarias 29/

Oficina del Conciliador de Relaciones Raciales 30/

Comisión Permanente de Investigación 31/

Consejo Presidencial de los Derechos de las Minorías 32/

Comisión de Reclamaciones Públicas de Nigeria 33/

Comité Sami 34/

Servicios de Bienestar Social 35/

Comisión Consultiva Permanente de Derechos Humanos 36/

Liga Tunecina de Derechos Humanos 37/

Centro de Investigaciones de Idiomas Nacionales 38/

2. Organismos de protección de las poblaciones autóctonas

Comité de Asuntos de Refugiados 39/

Departamento de Asuntos Maoríes y de las Islas 40/

Comisión Finlandesa de Asuntos Lapones 41/

---

20/ Cuba, 21/ Canadá, 22/ Pakistán, 23/ Irlanda del Norte, 24/ Pakistán, 25/ India, 26/ México, 27/ Finlandia, 28/ Checoslovaquia, 29/ Australia, 30/ Nueva Zelanda, 31/ Tanzania, 32/ Singapur, 33/ Nigeria, 34/ Finlandia, 35/ Chipre, 36/ Irlanda del Norte, 37/ Túnez, 38/, 39/ Finlandia, 40/ Nueva Zelanda, 41/ Finlandia.

Instituto Nacional Indigenista de México 42/

Consejo Lapón Noruego 43/

Comisión Sueca de Asuntos Sami 44/

3. Organizaciones de protección de los extranjeros, los migrantes y los inmigrantes

Comisión Asesora de Extranjeros 45/

Consejo Australiano de Asuntos Étnicos 46/

Comisión sobre los Prejuicios Étnicos y Discriminación 47/

Comité de Asuntos de Migración 48/

Directorio de Extranjeros y Junta de Refugiados 49/

Centros de Recursos Multiculturales 50/

Asociación Noruega de Trabajadores Extranjeros 51/

4. Organismos para la protección de niños y menores

Junta de Atención a la Infancia 52/

Ombudsman de la Infancia 53/

Comité Nacional Popular para la Defensa del Niño 54/

Comisión de Derechos del Niño 55/

Consejo de Asuntos Familiares 56/

Consejo Superior de la Infancia 57/

Comité Federal Mixto para la Infancia y la Juventud 58/

Junta Nacional de la Infancia 59/

Junta de Bienestar de la Juventud 60/

Bienestar de la Madre y el Niño 61/

Asociación de Menores 62/

---

42/ México; 43/ Noruega; 44/ Suecia; 45/ Bélgica; 46/ Australia; 47/ Suecia; 48/ Finlandia; 49/ Dinamarca; 50/ Australia; 51/ Noruega; 52/ Barbados; 53/ Noruega; 54/ China; 55/ Suecia; 56/ Polonia; 57/ Egipto; 58/ Estados Unidos; 59/ India; 60/ Noruega; 61/ URSS; 62/ México.

Junta Nacional del Niño 63/

Comisión Nacional del Año 64/

Consejo Nacional para la Niñez 65/

Consejo Nacional de Asuntos del Niño 66/

Directorio Nacional de la Infancia y Familias 67/

Política Nacional del Niño 68/

Sociedad de Ayuda de Vivienda para Huérfanos 69/

Unión Polaca de Guías 70/

Asociación Polaca de Estudiantes 71/

Unión Rural de las Juventudes 72/

Junta Social de Bienestar 73/

Sociedad de Amigos de los Niños 74/

Comisión Permanente sobre Condiciones de Trabajo y de Vida de la Mujer, la Maternidad y el Bienestar Infantil 75/

Consejo Supremo del Niño 76/

Unión de las Juventudes Socialistas Polacas 77/

5. Organismos para la protección de la mujer

Consejo Asesor Nacional de Asesoramiento de la Mujer 78/

Comisión del Soviet Supremo sobre las Condiciones de Trabajo y de Vida de la Mujer 79/

Comisión de Derechos de la Mujer 80/

Comité sobre la Condición Jurídica de la Mujer 81/

Comité Nacional de la Mujer 82/

Oficina de Asuntos de la Mujer 83/

---

63/ India, 64/ Argelia, 65/ República Dominicana, 66/ Bangladesh, 67/ Panamá, 68/ India, 69/, 70/, 71/, 72/ Polonia, 73/ Finlandia, 74/ Polonia, 75/ RSS de Bielorrusia, 76/ Egipto, 77/ Polonia, 78/ Australia, 79/ URSS, 80/ Barbados, 81/, 82/ India, 83/ Australia.

C. Organismos que garantizan la igualdad en el empleo

Consejo de la Igualdad Danés 1/

Departamento de Empleo y de Promoción del Empleo, Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales 2/

Departamento de Empleo en los Consejos Populares Locales 3/

División del Empleo 4/

Consejo de la Igualdad 5/

Comisión de la Igualdad en el Empleo 6/

Ombudsman de la Igualdad 7/

Comité de Igualdad de Tratamiento 8/

Consejo Supremo para la Igualdad Profesional entre Hombres y Mujeres 9/

División General 10/

Comités Nacionales y Locales contra la Discriminación de Empleo 11/

Comités Nacionales y Estatales contra la Discriminación en el Empleo y la Ocupación 12/

Comisión Portuguesa de Derechos de la Mujer 13/

Tribunal de Apelaciones de Impuestos y Valuaciones 14/

Comité Asesor Tripartito 15/

Comité de Vigilancia 16/

---

1/ Dinamarca; 2/ Zimbabwe; 3/ Polonia; 4/ Barbados; 5/ Dinamarca; 6/ Estados Unidos; 7/ Finlandia; 8/ Austria; 9/ Francia; 10/ Barbados; 11/, 12/ Australia; 13/ Portugal; 14/ Barbados; 15/, 16/ India.

D. Instituciones para la difusión de información, en particular la información sobre derechos humanos

Comisión Nacional Australiana de la UNESCO 1/

Departamentos de libertades civiles 2/

Comisionados de libertades civiles 3/

Comisión de Información y Orientación en Materia de Derechos Humanos 4/

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos 5/

Comité de Derechos Humanos 6/

Consejo de Protección de los Derechos Humanos 7/

Comisión de Derechos Humanos 8/

Comisión Permanente de Derechos Humanos sobre el Derecho de Amparo 9/

Fundación Maragopoulos de Derechos Humanos 10/

Instituto Nigeriano de servicios en asuntos internacionales 11/

Consejos populares 12/

Universidades populares de la URSS 13/

Instituto Polaco de Asuntos Internacionales 14/

Sociedad Polaca de la Cruz Roja 15/

Investigaciones académicas e información sobre derechos humanos 16/

Sociedad para la popularización de la cultura y la ciencia 17/

Sociedad de Amigos de las Naciones Unidas 18/

Universidad Yermouth de Jordania 19/

---

1/ Australia; 2/, 3/ Japón; 4/ Suriname; 5/ Venezuela; 6/ República Democrática Alemana; 7/ Brasil; 8/ Nicaragua; 9/ Ecuador; 10/ Grecia; 11/ Nigeria; 12/ Polonia; 13/ URSS; 14/, 15/, 16/, 17/, 18/ Polonia; 19/ Jordania.



E. Instituciones educativas

Academia de Ciencias Sociales 1/

Fundación Canadiense de derechos humanos 2/

Comisión Canadiense de derechos humanos 3/

Comité Central del Partido Unido de Trabajadores Polacos 4/

Junta de la Infancia 5/

Departamentos de libertades civiles 6/

Comisionados de libertades civiles 7/

Comité de investigación en la educación infantil 8/

Comisión de Planificación de la Educación y Promoción de la Investigación 9/

Instituto Internacional de Derechos Humanos 10/

Departamento judicial 11/

Educación jurídica de la población en la materia de derechos humanos 12/

Comisión Nacional sobre la condición del filipino 13/

Instituto Nigeriano de Asuntos Internacionales 14/

Comité Noruego de Derechos Humanos 15/

Junta Nacional de Educación sueca 16/

---

1/ Polonia; 2/, 3/ Canadá; 4/ Polonia; 5/ Barbados; 6/, 7/ Japón; 8/ Reino Unido; 9/ República Federal de Alemania; 10/ Francia; 11/ España; 12/ URSS de Ucrania; 13/ Filipinas; 14/ Nigeria; 15/ Noruega; 16/ Suecia.

F. Sistemas de salud pública

- Programa de Salud de los Aborígenes 1/  
Asociación Católica "Caritas" 2/  
Dirección de Enfermedades Epidémicas 3/  
Programa de Salud de la Comunidad 4/  
Departamento de Salud y Bienestar Social 5/  
Departamento de la Salud y el Medio Ambiente 6/  
Asociación de Planificación Familiar 7/  
Comisionado de Servicios de la Salud 8/  
Comisión Nacional de Impedidos 9/  
Departamento Nacional de Planificación Familiar y Población 10/  
Departamento ocupacional de seguridad sanitaria y compensación 11/  
Comité Polaco de Ayuda Social 12/  
Cruz Roja Polaca 13/  
División de Control de la Población y Planificación Familiar del  
Ministerio de Salud 14/  
Consejos Populares Provinciales 15/  
Centros de salud rural 16/  
Junta Nacional Sueca 17/  
Junta Nacional Sueca de Salud y Bienestar 18/  
Comité de salud de las poblaciones 19/

---

1/ Australia, 2/ Polonia, 3/ Senegal, 4/ Austria, 5/ Polonia, 6/ Iraq,  
7/ Nueva Zelanda, 8/ Reino Unido, 9/ Filipinas, 10/ Túnez, 11/ Zimbabue,  
12/, 13/ Polonia, 14/ Bangladesh, 15/ Polonia, 16/ Chipre, 17/, 18/ Suecia,  
19/ India.

G. Seguridad Social y Sistemas de Seguros Sociales

Junta Central de Bienestar Social 1/

Instituciones Cooperativas de Seguros 2/

Departamento de Servicios Sociales del Ministerio del Trabajo y Servicios Sociales 3/

Corporación de la vivienda 4/

Departamentos de seguros 5/

Comisión Nacional de Desarrollo Integral de la Familia 6/

Junta Nacional de Seguros 7/

Ministerio Nigeriano de Desarrollo Social 8/

Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo 9/

División del Seguro Social 10/

Institución del Seguro Social controlada por el Estado 11/

Juventud, Deportes y Cultura 12/

---

1/ India, 2/ Polonia, 3/ Zimbabwe, 4/ Bahamas, 5/ Polonia, 6/ México, 7/ Barbados, 8/ Nigeria, 9/ Filipinas, 10/ Barbados, 11/ Polonia, 12/ Niger.

IV. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Amnistía Internacional, sección de Finlandia 1/

Amicale des Femmes Juristes 2/

Movimiento Antirracista 3/

Asociación para la protección de los derechos humanos contra los abusos de la psiquiatría 4/

Asociación de amigos de los derechos humanos 5/

Asociación senegalesa de investigación y estudios jurídicos 6/

Asociación senegalesa para las Naciones Unidas 7/

Sección Australiana de Amnistía Internacional 8/

Iglesia Católica 9/

Unión Central de Bienestar del Niño 10/

Comité senegalés de derechos humanos 11/

Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados 12/

Comisión de la condición femenina 13/

Comisión portuguesa pro Amnistía Internacional 14/

Comisión Nacional de los derechos de la mujer senegalesa 15/

Consejo Supremo para la Igualdad Profesional entre Hombres y Mujeres 16/

Comité Dominicano de Derechos Humanos 17/

Asociación Egipcia de Derechos Humanos 18/

Comités étnicos y religiosos 19/

Federación de Juristas Iraquíes 20/

Fundación de Derechos Humanos 21/

Asociación Finlandesa de Gitanos 22/

Cruz Roja Finlandesa 23/

---

1/ Finlandia, 2/ Senegal, 3/ Canadá, 4/ Austria, 5/ Egipto, 6/, 7/ Senegal, 8/ Australia, 9/ República Dominicana, 10/ Finlandia, 11/, 12/, 13/, 14/ Portugal, 15/ Senegal, 16/ Francia, 17/ República Dominicana, 18/ Egipto, 19/ Canadá, 20/ Iraq, 21/ Grecia, 22/, 23/ Finlandia.

Fundación Francisco Ulises Espaillat 24/  
Federación General de Mujeres Iraquíes 25/  
Ihmisoikenspuristit 26/  
Indios 27/  
Instituto Indonesio de Defensa de los Derechos Humanos 28/  
Sociedad Iraquí de Derechos Humanos 29/  
Organización de Inuit y Nativos 30/  
Asociación de Abogados 31/  
Liga de Derechos Humanos 32/  
Liga Portuguesa de Derechos Humanos 33/  
Comisión de mediación de los tribunales del trabajo en los tribunales  
distritales 34/  
Organización de grupos de impedidos 35/  
Asociaciones provinciales de libertades civiles 36/  
Sección griega de Amnistía Internacional 37/  
Sección nacional de Juristas Demócratas 38/  
Sección senegalesa de la Asociación de Colegios de Abogados Africanos 39/  
Unión Dominicana para la defensa de los derechos humanos 40/  
Unión pro derecho del hombre y del ciudadano 41/  
Unión de derechos de la Mujer unioni 42/  
Organización del derecho de la mujer 43/  
Uniones de trabajadores 44/  
Comisiones de mediación de las empresas 45/

---

24/ República Dominicana, 25/ Iraq, 26/ Finlandia, 27/ India,  
28/ Indonesia, 29/ Iraq, 30/ Canadá, 31/ Iraq, 32/ Austria, 33/ Portugal,  
34/ Polonia, 35/, 36/ Canadá, 37/ Grecia, 38/, 39/ Senegal, 40/ República  
Dominicana, 41/ Grecia, 42/ Finlandia, 43/ Canadá, 44/ URSS, 45/ Polonia.

BIBLIOGRAPHY

World Conference Reports

1. Rapport sur la Conférence de Genève des ONG sur les droits de l'homme, réunie par le Comité international ad hoc de Genève pour l'année des droits de l'homme, Palais des Nations, Genève, 29-31 janvier 1968.
2. Report of the 14th International Conference on Social Welfare, Canadian Welfare Council, Ottawa, 1968, II, 123 pages.
3. Report of the World Conference of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, Copenhagen, 14-21 July 1980 (Sales No. E.80.XIV.3).
4. Report of the Second World Conference to Combat Racism and Racial Discrimination, Geneva, 1-12 August 1983 (Sales No. E.83.XIV.4).

Reports of Seminars and Symposia

5. Report of the Seminar on Judicial and other Remedies against the Illegal Exercise or Abuse of Administrative Authority, Poradeniya, Kandy, Sri Lanka, 4-15 May 1959 (ST/TAO/HR/4).
6. Report of the Seminar on Judicial and other Remedies against the Abuse of Administrative Authority, Stockholm, Sweden, 12-25 June 1962 (ST/TAO/HR/15).
7. Report of the Seminar on the Role of the Police in the Protection of Human Rights (ST/TAO/HR/16), Canberra, Australia, 24 April-13 May 1963.
8. Report of the Seminar on Participation in Local Administration as a Means of Promoting Human Rights, Budapest, Hungary, 14-27 June 1966 (ST/TAO/HR/26).
9. Report of the Seminar on Human Rights in Developing Countries, Dakar, Senegal, 8-12 February 1966 (ST/TAO/HR/25).
10. Report of the Seminar on Special Problems Relating to Human Rights in Developing Countries, Nicosia, Cyprus, 26 June - 9 July 1969 (ST/TAO/HR/36).
11. Colloque sur la promotion de la santé par l'hygiène dans l'habitat, Brussels, Université Libre, Institut de Sociologie, 1969, 125 pages.
12. Report of the Seminar on the Promotion and Protection of the Human Rights of National, Ethnic and other Minorities, Chrid, Yugoslavia, 25 June - 8 July 1974 (ST/TAO/HR/49).
13. Report of the Seminar on the Human Rights of Migrant Workers, Tunis, 12-24 November 1975, New York, 1976 - IV, 47 pages (ST/TAO/HR/50).
14. Report of the Seminar on National and Local Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Geneva, 12-29 September 1978 (ST/HR/SER.A/2).

15. Report of the Seminar on Recourse Procedures Available to Victims of Racial Discrimination and Activities to be Undertaken at the Regional Level, Geneva, Switzerland, 9-20 July 1979 (ST/HR/SER.A/3).
16. Third Sokol Colloquium on the Family in International Law: Some Emerging Problems, University of Virginia, School of Law, 6-7 April 1979.
17. Symposium on the Role of the Police in the Protection of Human Rights, The Hague, 14-25 April 1980 (ST/HR/SER.A/6).
18. Report of the Seminar on National, Local and Regional Arrangements for the Promotion and Protection of Human Rights in the Asian Region, Colombo, 21 June - 2 July 1982 (ST/HR/SER.A/12).
19. Report of the Seminar on the Recourse Procedures and other Forms of Protection Available to Victims of Racial Discrimination and Activities to be Undertaken at the National and Regional Levels, with special reference to Asia and the Pacific, Bangkok, 2-13 August 1982 (ST/HR/SER.A/13).
20. Report of the International Colloquium on the Right to Health Protection (1983: Turin), Act of the International Colloquium on the Right to Health Protection, 1984, 176 pages.
21. Report of the Seminar on the Ways and Means of Achieving the Elimination of the Exploitation of Child Labour in All Parts of the World, Geneva, 28 October - 8 November 1985 (ST/HR/SER.A/18).
22. Report of the Seminar on the International Assistance and Support to Peoples and Movements Struggling against Colonialism, Racism, Racial Discrimination and Apartheid, Yaoundé, Cameroon, 28 April - 9 May 1986 (ST/HR/SER.A/19; A/41/571).

Studies and reports published as Sales publications

23. Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices, by A. Krishnaswami (Sales No. 60.XIV.2).
24. Study of Discrimination in the Matter of Political Rights, by Hernán Santa Cruz (Sales No. 63.XIV.2).
25. Study of Discrimination in Respect of the Right of Everyone to Leave Any Country, Including His Own, and to Return to His Country, by José Ingles (Sales No. 64.XIV.2).
26. Study on the Right of Everyone to Be Free from Arbitrary Arrest, Detention and Exile (Sales No. 65.XIV.2).
27. Study of Equality in the Administration of Justice, by Mohamed Ahmed Abu Ranwat (Sales No. 71.XIV.3).
28. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, by F. Capotorti, New York, 1979 (Sales No. E.78.XIV.1)
29. International Provisions Protecting the Human Rights of Non-citizens, by Baroness Elles, New York, 1980, 63 pages (Sales No. E.80.XIV.2).

30. The Individual's Duties to the Community and the Limitations on Human Rights and Freedoms under Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights: A Contribution to the Freedom of the Individual under Law, by Erica-Irene A. Daes, 1983 (Sales No. E.82.XIV.1).
31. New International Economic Order and Promotion of Human Rights, by Raúl Ferrero (Sales No. E.85.XIV.6).
32. Principles, Guidelines and Guarantees for the Protection of Persons Detained on Grounds of Mental Ill-health or Suffering from Mental Disorder, by Erica-Irene A. Daes (Sales No. E.85.XIV.9).
33. Study on the Preliminary Study with Regard to Such Measures as Have Hitherto been Taken and the Conditions Regarded as Essential to Ensure and Secure the Independence and Impartiality of the Judiciary, Jurors and Assessors and the Independence of Lawyers (E/CN.4/Sub.2/428).
34. Study on Amnesty Laws and their Role in the Safeguard and Promotion of Human Rights, by Louis Joinet (E/CN.4/Sub.2/1985/16/Rev.1).

#### Published Studies and Reports

35. Principles of Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (DPI/832).
36. Declaration on Social and Legal Principles Relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (DPI/914).
37. Declaration on the Human Rights of Individuals who are Not Nationals of the Country in Which They Live (DPI/894).
38. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (DPI/895).
39. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and Procedures for the Effective Implementation of the Rules (DPI/832).
40. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing rules)(OPI/896).
41. Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners (DPI/957).
42. Basic Principles on the Independence of the Judiciary (DPI/958).
43. Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty (DPI/960).



Other publications

44. Romier, Lucien                      Promotion de la femme, Paris, Librairie Hachette, 1930, 253 pages.
45. Lavroff, DG                        Les Libertés publiques en Union Soviétique, Paris, Ed. A. Pedone, 1963.
46. Doublet, J.                        Human rights and social security, International Social Security Review, Geneva, pp. 483-495, 1968.
47. Milton, I. Roemer                  The organization of medical care under social security, International Labour Office, Geneva, 1969.
48. Chabaud, Jacqueline                Education et promotion de la femme, Paris, UNESCO, 1970, 175 pages.
49. Carey, J.                        United Nations protection of civil and political rights, New York, Syracuse University Press, 1970, XII, 205 pages.
50. World Health Organization              Promotion de la santé et environnement humain : étude établie sur la base des discussions techniques tenues lors de la 27ème Assemblée Mondiale de la Santé, Genève, 1975, 76 pages.
51. Mouton, Pierre                    Social security in Africa: trends, problems and prospects, International Labour Office, Geneva, 1975.
52. Archibald, Cox                    The role of the Supreme Court in American government, Oxford, Clarendon Press, 1976, 118 pages.
53. Dupuy, René Jean                  Le droit à la santé en tant que droit de l'homme, Alphen a.d. Rijn, Sijthoff et Noordhoff, 1979, 500 pages.
54. Library of Palais de la Paix              International protection of the rights of the child, Library of Palais de la Paix, La Haye, 1979.
55. Verwilghen, Michel et Hans van Houtte              Conflits d'autorités et de juridictions relatifs à la protection de la personne mineur, Revue Belge de droit international, 1980, pp. 397-431.
56. Abdel Raouf Mahdi                  La protection pénale de l'enfant victime en droit criminal égyptien : étude comparée, Egypte Contemporaine, octobre 1981, pp. 177-232.
57. Filipescu, Ion                    La protection de l'enfant dans le droit de la République Socialiste de Roumanie, Analele Universitatii Bucuresti, Vol. 31, 1982, pp. 25-32.

58. Shaki, A.H. Les principaux aspects du droit israélien relatifs à la garde des enfants et notamment l'application de la théorie de l'intérêt bien compris de l'enfant, Revue internationale de droit comparé, 36(2), avril/juin 1984, pp. 333-372.
59. Guggenheim, Martin The right to be represented but not heard: reflections on legal representation for children, 59(1), April 1984, pp. 76-155.
60. Nikken, Pedro Los derechos del niño, de los ancianos y de la mujer: su protección internacional, Revista IIDH, No. 4, Jul/Dic 1986, pp. 15-42.

-----